

**PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA PROTESTA EN
COLOMBIA**

JHOAN FABIÁN SÁNCHEZ ESPITIA

Código: 041121342

STEFANNY BRIGITTE URIBE PINEDA

Código: 041131377

NIXON FELIPE VIVAS TORO

Código: 041111282



UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURÍDICAS

BOGOTÁ D.C.

2019

**PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA PROTESTA EN
COLOMBIA**

JHOAN FABIÁN SÁNCHEZ ESPITIA

Código: 041121342

STEFANNY BRIGITTE URIBE PINEDA

Código: 041131377

NIXON FELIPE VIVAS TORO

Código: 041111282

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado.

Docente Asesor

DR. WALTER PÉREZ NIÑO



UNIVERSIDAD LIBRE

Facultad de Derecho

Bogotá D.C.

Dedicatoria

El presente trabajo va dedicado a todos aquellos que propenden por la preservación del orden constitucional y del Estado Social y de Derecho.

Agradecimientos

Agradecemos primeramente a Dios, por permitirnos el don del saber y el aprendizaje; además agradecemos a nuestros padres por darnos día a día el impulso vital para culminar nuestras aspiraciones y metas.

Stefanny y Jhoan agradecen a Joaquín su hijo, porque a través del instinto paterno y la ternura, fortaleció su disciplina y responsabilidad para así llevar este proyecto a cabo.

Aceptación:

Valoración: _____

Calificación (A o I): _____

Dr. (a) xxxx
Jurado (o Asesor)

Dr. (a) xxxx
Jurado

Dr. (a) xxxx
Jurado

Autoridades Académicas**Fundadores**

General. Benjamín Herrera – General Rafael

Uribe Uribe

Presidente Nacional

Dr. Jorge Orlando Alarcón Niño

Vicepresidente

Dr. Jorge Gaviria Liévano

Rector Nacional

Dr. Fernando Enrique Dejaron Rodríguez

Presidente Sede Principal

Dr. Julio Roberto Galindo

Rector Sede Principal

Dr. Jesús H. Álvarez Mora

Decano Facultad de Derecho

Fernando Arturo Salinas

Secretaria Académica

Dra. Ana Rocío Niño

Director del Centro de Investigaciones

Dr. Jhon Fitzgerald Martínez Vargas

Coordinador del Centro de Investigaciones

Dr. Belisario Daza Gonzales

Tabla de contenido

Introducción	8
Capítulo 1. Antecedentes y contenido del derecho a la protesta	12
1.1. Origen y antecedentes del derecho a la protesta	12
1.2. La protesta, conceptos y elementos	22
Capítulo 2. Normatividad para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta.....	34
2.1. Crítica a la normatividad sobre el derecho a la protesta	51
Capítulo 3. Análisis del ejercicio del derecho a la protesta en Colombia	60
Conclusiones.....	<u>7372</u>
Referencias	<u>7877</u>

Introducción

Recientemente la humanidad ha fungido como testigo de las acciones ocurridas en diferentes regiones del planeta, donde miles y hasta millones de individuos se han volcado a las calles para levantar su voz de protesta en contra del orden social y político establecido, así como para exigir que se cumplan las promesas realizadas en elecciones por el candidato ganador y demandar que los derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales se conviertan en realidad. Algunos ejemplos de manifestaciones que han trascendido en la historia son: la primavera árabe, el movimiento antiglobalización, la séptima papeleta, la marcha del hambre y actualmente los afamados chalecos amarillos en Francia. Lo anterior, ha sido un verdadero llamado de atención a los gobernantes, ya que el pueblo no se satisface con que sólo se le garantice el libre ejercicio del derecho al sufragio, por ello su inconformidad es expresada, pese a la fuerza represiva que pueda enfrentar. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos, por lo que reclaman un continuo diálogo con sus autoridades electas, además de la garantía de la real participación ciudadana en los asuntos públicos (Organización de las Naciones Unidas, 2014).

El derecho a la protesta ha sido el pilar fundamental de grandes cambios en el mundo, es una de la herramientas más utilizadas y eficaces por la humanidad para expresar su inconformismo ante los gobiernos y así reclamar sus derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales (Organización de las Naciones Unidas, 2014).

El Estado para defenderse justifica y asimila la protesta con violencia, a fin de desvalorizar, silenciar, descalificar e invisibilizar las protestas, aduciendo el uso de la represión como medio de contención y supresión. Esta violencia se materializa a través de

actos policiales abusivos, donde es común el uso desproporcionado de fuerza, hasta llegar a pasar a los malos tratos, detenciones arbitrarias y hasta torturas, vulnerando de esta forma los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Concretamente, en Colombia, en el presente siglo se han registrado varias protestas sociales de grandes magnitudes (Cruz, 2014), siendo los trabajadores, estudiantes y campesinos quienes en su mayoría han expresado sus demandas, entre ellas, la reivindicación de la paz (López, 2014). En igual medida, la represión y la criminalización de la protesta se incrementó, con casos de abuso de la fuerza por parte de las autoridades (Movice-CCEEU, 2013), los cuales no tuvieron una discusión pública relevante. Así, actualmente existe debilidad jurídica institucional del derecho a la protesta social porque se han promulgado leyes que limitan el libre ejercicio del derecho (Ley 599 de 2000 y Ley 1801 del 2016) criminalizando a los manifestantes penalmente y generando violencia y represión.

Esta propuesta de investigación es necesaria para aportar conocimiento y garantizar el derecho fundamental a la reunión conexo a la libre expresión de acuerdo con los lineamientos internacionales y nacionales a fin de que el Estado brinde la protección necesaria del derecho a la protesta.

Pese a esta normatividad, de manera anacrónica se han presentado situaciones donde el derecho y la garantía de éste, ha generado gran debate nacional, el cual hasta hoy no ha sido resuelto.

Los cuestionamientos planteados inducen la siguiente pregunta: ¿Cómo se materializa el derecho a la protesta en Colombia según los estándares normativos que la regulan?

Ante la anterior cuestión el estudio tuvo la siguiente hipótesis: en el ordenamiento jurídico colombiano existe una brecha que impide la protección y cumplimiento del derecho a la protesta acorde a los estándares internacionales, por lo que se ven vulnerados los derechos de los individuos que la practican.

Por todo lo dicho, este trabajo tiene como objetivo general analizar el ejercicio del derecho a la protesta social en Colombia teniendo en cuenta su evolución histórica y su marco normativo.

Para abordar el tema se tuvieron en cuenta diferentes pronunciamientos de organismos internacionales, empezando por la Organización de la Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia como referencia jurisprudencial del tema, así como otras fuentes legislativas y judiciales (internacionales y nacionales), al igual que diferentes autores que han profundizado sobre el derecho a la protesta que permite proyectar la perspectiva que poseen los autores del presente estudio.

Por lo tanto, en esta tesis, al profundizar en el derecho a la protesta, se enmarca dentro de la línea de investigación en “Derecho, Conflicto Social y Justicia”, buscando con ello gestar conciencia crítica ante un derecho fundamental de la sociedad, respetando las diferencias y promoviendo la tolerancia hacia los grupos sociales que ven en la protesta una forma de manifestar su inconformidad con algún tema en específico, buscando con ello ratificar la visión institucional (Universidad Libre, 2019) en materia de construir un mejor

país, un país más tolerante, que respete el derecho a la expresión de las masas y la agrupación de personal.

Para ello se realizó una investigación de enfoque cualitativo, puesto que el estudio se basó en normatividad, jurisprudencia, artículos y trabajos de grado. Además, se desarrolló una investigación de tipo documental, pues se apoyó en la consulta de documentos impresos y electrónicos.

El documento se encuentra dividido en tres capítulos, en el primero se revisa los orígenes, antecedentes y concepto del derecho a la protesta, iniciando el estudio a nivel mundial de su desarrollo histórico para terminar examinando aspectos relevantes a nivel nacional; luego de esto se entra a definir el derecho a la protesta y todo lo que corresponde a su juicio axiológico. En el segundo apartado, se estudia la normatividad nacional e internacional promulgada tendiente a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta como también la normatividad ligada a su regulación y limitación, realizando posteriormente una crítica a estos postulados normativos. En el tercero, se analiza el ejercicio del derecho a la protesta en Colombia, entrando a observar casos específicos. Para finalizar, se presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas de los documentos consultados.

Capítulo 1.

Antecedentes y contenido del derecho a la protesta

La protesta como herramienta ciudadana ha sido un medio de expresión popular que ha originado grandes cambios a nivel internacional y nacional. En el presente capítulo se expondrán las protestas más representativas, aquellas que han trascendido en la historia y cuyos antecedentes han sido fundamentales para la materialización del derecho a la protesta; así mismo, se estudiará la protesta en lo que respecta a su conceptualización y cada uno de los elementos jurídicos y axiológicos que la componen.

1.1. Origen y antecedentes del derecho a la protesta

La protesta ha sido un mecanismo ciudadano que ha permitido la expresión del pueblo y ha originado grandes cambios sociales en el mundo a través de la historia. Un ejemplo de ello se dio durante las últimas décadas del siglo XIX en Washington (Estados Unidos), cuando algunas activistas norteamericanas habían comenzado a organizarse para reclamar el derecho de las mujeres a votar, pero fue el 10 de enero de 1917 cuando las sufragistas decidieron concentrarse diariamente frente a la Casa Blanca. Sus protestas no tuvieron apenas repercusión durante los primeros meses, aunque el 20 de junio de 1917 estalló el escándalo, alentada por la visita de una delegación rusa a la Casa Blanca. Durante esta las sufragistas exhibieron una pancarta que decía: *“Nosotras, las mujeres de EE. UU. podemos afirmar que EE. UU. no es una democracia. A los 20 millones de mujeres que vivimos aquí se nos niega el derecho al voto”*; pese que más de 200 activistas fueron detenidas, la causa se hizo visible a nivel nacional. En ese tiempo el gobierno de EE. UU.

se había embarcado en la 1ª Guerra Mundial y exigía a las mujeres unirse al esfuerzo de guerra. “*¿Entonces por qué no podemos votar?*”, respondieron las feministas (Silicia, 2012).

El presidente Wilson, que hasta entonces se había opuesto al sufragio femenino, cambió su postura en 1918. Al año siguiente, el Congreso aprobó la Enmienda 19 a la Constitución, que prohíbe la discriminación de voto por razón de sexo (Silicia, 2012).

Por su parte, en la India el 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi comenzó una caminata de 390 km para protestar contra el Imperio Británico, pues en esa época Londres había instaurado un impuesto sobre la producción y la venta de sal en la India. Durante los 23 días de caminata, Gandhi se pronunció multitudinarios mítines donde utilizaba este impuesto como ejemplo de la injusticia colonial, logrando la decisión a la protesta de miles de jóvenes. La marcha convirtió a Gandhi en una referencia política mundial y desencadenó la primera ola de desobediencia civil masiva contra el poder británico. Esta protesta fue el inicio de una lucha de más de 17 años, logrando al final que la India fuese independiente (Silicia, 2012).

Posteriormente, el 16 de junio de 1976, en Johannesburgo (Sudáfrica), los estudiantes del barrio negro de Soweto salieron a la calle cuando el gobierno sudafricano instauró una ley que obligaba a que la mitad de la enseñanza se realizase en lengua afrikáans, a lo cual el gobierno respondió con dureza, asesinando a cientos de jóvenes (Silicia, 2012).

Esta protesta significó el comienzo de la lucha organizada contra el Apartheid, aglutinada en torno al “Congreso Nacional Africano” de Nelson Mandela. En recuerdo de los hechos en Soweto, cada el 16 de junio se celebra en Sudáfrica el “Día de la Juventud” (Silicia, 2012).

Otra protesta que ha producido cambios importantes para la sociedad fue realizada el 14 de agosto de 1980 en Gdansk (Polonia), cuando se dio una huelga de más de 17.000 trabajadores en los astilleros de Gdansk, lo cual forzó al gobierno comunista de Polonia a legalizar “Solidarnosc”, el primer sindicato independiente. Pocos meses después, la organización contaba con más de 10 millones de miembros y jugaría un papel fundamental para instaurar la democracia en Polonia (Silicia, 2012).

De otro lado, la protesta, a través de la huelga, fue protagonista para un cambio social en Checoslovaquia, cuando el 27 de noviembre de 1989 se dio una huelga general, con notable éxito tras paralizar prácticamente toda la infraestructura del país durante dos horas. Esta huelga fue una demostración de poder del movimiento disidente y el principio de la evolución política, que se traduciría en la independencia entre la República Checa y la República Eslovaca en el año 1993, a este movimiento se le llamó la Revolución de Terciopelo (Martín, 2012).

Más recientemente, cansadas de una guerra que se había cobrado más de 50.000 vidas, las mujeres de Liberia organizaron una serie de protestas y otras acciones que forzaron un acuerdo de paz entre el gobierno y las dos fuerzas rebeldes. La activista Leymah Gbowee Gbowee fue galardonada con el Nobel de la Paz en 2011 y, ese mismo año, Liberia se convirtió en el primer país africano que eligió a una mujer como presidenta del gobierno (Silicia, 2012).

También, en el año 2003, pero en España, concretamente el 10 de abril, fue convocada una protesta general contra la participación de ese país en la Guerra de Irak y sus efectos socioeconómicos. El 11 de marzo de 2004, se produjo el atentado terrorista más grave de la historia reciente española, cuya autoría se adjudicó a Al Qaeda, como

consecuencia directa de la participación de España en la Guerra de Irak. El 19 de marzo de 2004 y tras haberse producido un cambio de gobierno se anuncia la retirada de las tropas de Irak (Rodríguez, 2013).

La Revolución Naranja es el nombre por el que se conoce a una campaña de protestas, huelgas, mítines y otras acciones políticas que tuvieron lugar en toda Ucrania por el resultado de las elecciones presidenciales de 2004, en las que sus participantes denunciaban la existencia de un fraude electoral a favor del candidato progubernamental Víktor Yanukovich. Salieron a la calle para aclamar al líder prooccidental Víktor Yúshchenko, logrando que se repitiese el proceso electoral. Hoy en día, Yanukovich es el actual presidente de Ucrania y el país se encuentra inmerso en una profunda crisis social (Gamboa, 2014).

La Primavera Árabe corresponde a una serie de alzamientos populares en los países árabes acontecidos entre 2010 y 2014. Calificados como revoluciones por la prensa internacional, la cadena de conflictos comenzó con la revolución tunecina, en diciembre de 2010. Por la naturaleza de sus protestas, en donde se buscó instaurar libertades democráticas, cambios políticos, económicos y sociales, algunos observadores europeos las asocian con las revoluciones europeas de 1830 (Priego, 2011).

La Primavera Árabe, si bien partió como protestas populares, en varios países el asunto creció sistemáticamente y el alzamiento civil tomó un protagonismo global. En Túnez y en Egipto las rebeliones derrocaron a los respectivos gobiernos en pocas semanas, pero en países como Libia o Siria, el gobierno respondió violentamente y se negó a abandonar el poder, lo que llevó a la población a armarse y a comenzar guerras civiles en ambos países. En Libia, los rebeldes insurgentes derrocaron a las fuerzas gubernamentales seis meses

después del inicio de la revolución. En Siria el conflicto continúa y ha pasado a las armas (Priego, 2011).

Ahora bien, con respecto a **América Latina**, la protesta también ha sido protagonista de cambios sociales, esta herramienta ciudadana ha sido especialmente utilizada por el movimiento obrero, basando su lucha a través de la movilización, con el fin de alcanzar la equidad y mejores condiciones laborales (González y Molinares, 2013). Este también ha sido el otro soporte de las fuerzas populares en el continente, junto con los movimientos campesinos. Sus primeras formaciones se encuentran en las poblaciones mineras de finales del siglo XIX. En la primera década del siglo XX se encuentra una primera ola de industrialización en varios países de la región que se sostuvo en gran parte con el trabajo de inmigrantes europeos, particularmente españoles e italianos (Dos Santos, 2004).

Esta nueva gente, trajo consigo sus ideales, imaginarios y su experiencia de lucha social, que pudo manifestarse en estas tierras a través de las inconformidades de artesanos y otros trabajadores, que empezaron a expresarse a través de la “huelga general revolucionaria a la cual se aproximaron hacia finales de 1910, después de la expansión industrial durante la I Guerra Mundial y la contracción económica que le sucedió” (Dos Santos, 2004; p. 70). Como sostiene Nieto (1942), hacia 1850 eran ya tan vigorosos los grupos sociales deseosos de extinguir y destruir la economía colonial, que esa prepotencia obligó al Gobierno a inclinarse ante sus exigencias.

Más adelante, en casos concretos, es importante citar los hechos ocurridos en el año 1909 en Buenos Aires, cuando se desarrolló la protesta conocida como “*La semana Roja*”, en la que hubo gran represión con numerosos muertos, y a raíz de la cual, el Poder Ejecutivo decretó el estado de sitio y aplicó la Ley de Residencia que expulsó del país a varios

anarquistas. En 1912, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, se produce otra protesta importante, “*El grito de Alcorta*“, en la Provincia de Santa Fe, en la que arrendatarios rurales se manifestaron contra el abuso de los propietarios. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, en 1919 se produce una manifestación que por sus consecuencias es conocida históricamente como “*La Semana Trágica*” en la que los obreros de los talleres metalúrgicos Vasena entran en huelga en demanda de aumento salarial y reducción de la jornada laboral y fueron reprimidos por la policía, el ejército y la llamada “*liga patriótica*”, logia integrada por grupos conservadores que tuvo el rol más significativo en las acciones represivas y que años más tarde otorgaría un gran protagonismo a las fuerzas armadas en la ruptura del orden constitucional. Luego, en 1921, estalla “*La Patagonia Trágica*” –también durante la primera presidencia de Yrigoyen–, en donde las huelgas patagónicas llevadas a cabo por los peones rurales sufrieron la cruenta represión por parte del ejército al mando del coronel Varela en el sur argentino y culminó con la masacre que costó 1.500 vidas humanas. Así mismo, el 17 de octubre de 1945 grandes masas de trabajadores provenientes sobre todo de la provincia de Buenos Aires marcharon hacia Plaza de Mayo con el objeto de exigir la inmediata libertad de Perón, durante la dictadura militar del General Edelmiro Farrel; en 1969, el “Cordobazo” (dictadura militar de Juan Carlos Onganía), manifestación que congregó a varios sectores, y que más allá de sus reclamos particulares, fue fundamentalmente una manifestación en contra un régimen dictatorial cuyas políticas económicas resultaron destructivas para el país, que marginó la actividad política y censuró las libertades individuales (Velazco y Contreras, 2004).

Recientemente, en otros países como México, en septiembre de 2014 el país fue sacudido por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de

Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero; inmediatamente, miles de ciudadanos convocaron reuniones y protestaron exigiendo justicia. El caso de Ayotzinapa puso al descubierto muchas otras desapariciones forzadas, además de una red de corrupción e impunidad extendida y vinculada al crimen organizado, en la que hace parte el gobierno mexicano que en el momento de emitir un comunicado sobre estas desapariciones ocultaron y manipularon la información deliberadamente. Ciudadanos activos convocaron a las manifestaciones a través de los medios sociales con la etiqueta *#YaMeCansé*, mientras que los partidos de oposición y los movimientos sociales clásicos, por lo menos al principio, tuvieron un papel muy marginal. Si bien las manifestaciones empezaron por el caso de Ayotzinapa, pronto comenzaron a centrarse también en otros asuntos, incluidos la corrupción generalizada, la parcialidad del sistema de justicia, la violencia y la inseguridad.

En abril de 2015, un escándalo de corrupción que involucraba al presidente y a la vicepresidente de Guatemala condujo a protestas masivas en las que se pedía sus renuncias y procesamientos. Después de meses de creciente presión pública, la vicepresidente, primero, y luego el presidente, se vieron forzados a dimitir y a enfrentar juicios. Nunca se había visto algo así en uno de los países más pobres, más desigual y violento de la región, con un amplio historial de represión hacia las OSC y de violaciones de los derechos civiles y ciudadanos.

En Guatemala, las protestas de 2015 fueron convocadas por la clase media urbana, usando la etiqueta *#RenunciaYa*; aquí miles de personas sin alguna forma de organización estructurada, y de diferentes espectros políticos y clases sociales, tomaron las calles exigiendo justicia y poner fin a la corrupción. La reacción y la amplia participación de los guatemaltecos en el extranjero, quizás no tan significativa en término de cifras, tuvo un

importante efecto en la creciente cohesión nacional. Uno de los claros mensajes de los manifestantes fue que ningún partido político, sin importar su ideología, era bienvenido a unirse a las manifestaciones (Fuentes-Nieva y Feroci, 2017).

Se dice que en América Latina el Movimiento Obrero fue uno de los pioneros en el escenario de la conflictividad social por su constante lucha mediante movilizaciones y huelga general revolucionaria, que significó desde entonces una constante para alcanzar la equidad social en mejores condiciones (González y Molinares, 2013).

En Colombia, desde principios del siglo XIX y hasta estos días, han sido las clases menos favorecidas, una colectividad que interviene para promover la protesta social y con ello, resistirse a todo lo que atente contra sus derechos e intereses, expresando así su inconformidad. Por ejemplo, hacia 1850 eran ya tan fuertes los grupos sociales que por su ímpetu el gobierno tuvo que ceder ante sus exigencias; experiencias éstas que para entonces solo se relacionaban con la economía colombiana. (González y Molinares, 2013).

Los años 1946-1957 en Colombia, se caracterizan por una pérdida paulatina de libertades democráticas, acentuadas por el temor causado a las élites por los sucesos del 9 de abril y ratificadas con el cierre del Congreso a fines de 1949. En este periodo, fueron varios los intentos de realizar manifestaciones como los de 1947 y 1949, años en los que se desarrollaron cuantiosos paros regionales, y un significativo número de huelgas como así lo refrendan el mismo proceso de movilización gaitanista y la incorporación de crecientes contingentes populares. El pequeño repunte en protestas del 49 se debió al profuso descontento del liberalismo contra el cierre político que se venía encima y a la imposición 'a sangre y fuego' del candidato conservador (Archila, 1995).

Al igual, entre las protestas más representativas en Colombia se encuentra la llamada “Marcha del Hambre”, la cual fue originada por los maestros y maestras del Magdalena en el año de 1966, que tuvo como objetivo emprender una marcha desde la ciudad de Santa Marta hasta Bogotá, con el fin de visibilizar y dar solución a las problemáticas sociales, económicas y educativas, por las que atravesaban los y las educadoras en general de todo el país. Esta protesta logró no solo el pago de los sueldos pendientes, sino el reconocimiento de las justas luchas del Magisterio a la luz de todo un país. (González, 2017).

En marzo de 1990, hubo una protesta generada por un grupo de estudiantes universitarios colombianos que crearon un movimiento social llamado “séptima papeleta”, quienes propusieron en las elecciones de Estado se dejara expresar, políticamente, la necesidad de una reforma constitucional mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con la cual se dio origen a la Constitución Política de 1991, la cual originó un giro en el pueblo colombiano (Muñoz, 2014).

De acuerdo con Archila (2006), del total de luchas sociales en Colombia entre 1975 y 2005 es de 13.130. El promedio anual para estos treinta y un años es de 423 protestas, casi tres veces superior a la media histórica entre 1958 y 1974, que fue de 173 por año.

Según el monitoreo de conflictos que realiza la Defensoría del Pueblo, entre 2007 y 2011, las acciones de protesta realizadas con mayor frecuencia han sido las movilizaciones locales, seguidas de los bloqueos de carreteras y los paros regionales (aunque también hubo acciones más radicales, como tomas de local, sabotaje a instalaciones públicas o privadas), estas realizadas en el entorno de los paros cocaleros, una forma de protestar los campesinos que cultivan ilícitamente marihuana, amapola y coca, pero que se ven afectados por la

erradicación de cultivos por parte del Estado, además esta movilización que fue influenciada por grupos al margen de la ley (Zevallos y Mujica, 2013).

Más recientemente entre 2010 y 2016 se produjo un auge inusitado de la protesta social en Colombia, que puede apreciarse tanto en términos cuantitativos como cualitativos. De acuerdo con la base de datos de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP, 2014), en 2013 se presentaron 1027 protestas, la cifra más alta desde que empezaron sus registros en 1975. Desde una perspectiva cualitativa, existe un ciclo ascendente de protestas de grandes magnitudes, que comprende el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013 (Cruz, 2012a; 2013), el paro campesino del Catatumbo, en junio y julio de ese año, otro paro campesino en mayo de 2014, y una “Minga” en mayo y junio de 2016.

Del anterior periodo hay que resaltar que las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde agosto de 2012 han incentivado la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

Entonces, el conflicto armado, social y político en Colombia ha degenerado en persecución del pensamiento, silenciando las voces de protesta de un pueblo que ha sido capaz de soñar con un país diferente, con verdadera equidad. Por ello, en los últimos 50 años se han tenido fuertes elementos de represión contra quienes quieren avanzar hacia la reconstrucción de un verdadero tejido social. Las fuertes represiones, estigmatización y criminalización, es lo que nos lleva a una profunda reflexión, hasta dónde nos ha llevado la ruptura del capitalismo contemporáneo (Vega, 2013); cuyas obras ha permitido abrir un

espacio para el pensamiento crítico y adoptar una postura anticapitalista, en favor de los oprimidos y explotados, retomando la senda de otra forma de organización social.

No obstante, debido a la ferviente violencia desaforada que se ha mantenido en nuestro país durante el último siglo a causa de la fuerza opresiva de la clase dominante, también se vislumbra la resistencia vehemente que ha mostrado la clase obrera, los estudiantes, los docentes, indígenas y demás minorías con sus marchas y movilizaciones no solo en las grandes urbes sino desde el campo, las provincias y resguardos; particularmente diversas en expresiones de protesta social, siempre en caminata a la defensa de su dignidad y en la esperanza de construir una patria más justa.

1.2. La protesta, conceptos y elementos

La protesta es la más común de todas las formas de disenso, por ello se podría afirmar que es un acto, una actividad (también puede ser una omisión o falta de actividad) o una conducta del individuo que está en contra de una decisión tomada por el Estado o, de manera más amplia, por el *statu quo* (Torres, 2013).

En la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, se reconocen derechos como la libertad de expresión, derecho a la reunión, el derecho a la libre asociación que forman parte del cuerpo del presente análisis, se relacionan y permiten que la protesta tome forma y pueda ser ejercida estos por las personas; por otro lado el Estado tiene un deber de respetar el derecho de las personas de disentir y de reclamar públicamente por sus derechos que no son respetados o por derechos que no son cumplidos y garantizados por el propio Estado, es decir permitir su expresión en el escenario de lo público donde se plasmará su malestar con sus reclamos y disensos.

Aunque Zaffaroni (2012) sostiene que la protesta depende de si un Estado reconoce el derecho a la protesta social como un mecanismo de reconocer o demandar derechos; además, añade que este derecho es garantizado por los tratados internacionales universales de Derechos Humanos, específicamente el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se manifiesta la libertad de pensamiento y conciencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como en el artículo 20, donde se establece el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Las manifestaciones sobrevienen en diferentes escenarios de una sociedad y normalmente surgen de manera espontánea o ante previa concertación de una población específica en busca de defender un interés común. En principio, se presume que toda protesta es pacífica si aquellas personas que la integran conservan intenciones sosegadas ante circunstancias de alteración del orden público o de ejercicio de violencia; lo que desde otra perspectiva no consiente Manzo (2018) quien relaciona la protesta social a la desobediencia, la cual, de acuerdo con la doctrina, toca aspectos de la ciencia política, del poder, de la forma como se dirime la tenencia y del ejercicio de éste en la sociedad.

A su vez Barrera (2008) observa la protesta social como herramienta que poseen los ciudadanos para recuperar sus derechos y luchar contra el abuso del poder estatal, por lo cual manifiesta:

La protesta social constituye la posibilidad para que los ciudadanos puedan recuperar sus derechos. El derecho a la protesta es el primer derecho, que es capaz de contener el abuso del poder para obligar a las autoridades, a través de la acción directa, a que se respete y valore los planteamientos legítimos de los excluidos. (p. 1)

La materialización de este derecho se reivindica con una serie de acciones colectivas de carácter público y sostenido, en busca de transponer a las autoridades las reclamaciones colectivas (Tilly y Wood, 2010). Pese a que, por lo general, se encuentra emparentada a movimientos sociales, estos son fenómenos distintos pues la protesta puede surtir un carácter coyuntural con algún grado de espontaneidad, en cambio los movimientos poseen niveles mayores de permanencia y organización, y tienen la oportunidad de elegir entre un repertorio de acciones (Godás, 2007).

El derecho a la protesta además se rige bajo tres principios, los cuales surgen de fundamentos axiológicos de la contestación social tales como: el principio de pluralidad, el principio de participación y el principio de legalidad.

Cuando se habla del principio de pluralidad, es importante señalar que la época contemporánea trajo consigo, muchos cambios, que, en la esfera del derecho constitucional, se tradujeron a la mutabilidad del paradigma para elaborar normas de comportamiento social en la comunidad política, es así, como se pasó del paradigma positivista y racionalista, al paradigma de los derechos fundamentales de las minorías sociales. Para el caso colombiano, sin duda alguna, ello ha significado algunos avances, en términos de aceptar la diversidad, como muestra de distinción, pero una distinción entre iguales, y este ha sido el cometido, si bien no muy fluido, pero si se nota un esfuerzo desde la Corte Constitucional de Colombia, por avanzar en esta vía del reconocimiento de los derechos individuales y colectivos (Cruz, 2017).

En la esfera de la política, uno de los principales aportes de lo contemporáneo, hace referencia a la pluralidad de proyectos políticos en una democracia participativa, pero también a la heterogeneidad demográfica y a las distintas cosmovisiones que existen del

mundo, es decir, múltiples filosofías de la vida, que se relativizan en el conjunto social, mientras combaten de forma restringida con los efectos de la globalización neoliberal.

Para Zagrebelsky (1995) la protesta social es un mecanismo histórico, pero también alternativo de otros proyectos políticos, como el vigente, es decir, el neoliberal, por ende, su objetivo es desafiar el estado de cosas existente para instituir un nuevo orden, orden que no debe ser absoluto, si en esencia se considera democrático, sino que se entiende como simples reglas de convivencia y enfrentamiento social. Siguiendo el argumento del autor italiano, si la protesta social es establecida como derecho en la Constitución, está necesariamente debe ser plural, porque le pertenece al pueblo reservarse la libertad de disentir.

La disensión por esencia exige la interlocución no solamente dialógica, de varios actores diferentes y contrarios, sino también la mediación de una acción política cualificada que ponga en tensión posturas irreconciliables, las cuales el consenso racional, de génesis liberal no puede domesticar. Una noción de pluralidad que pretenda resistir a los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y jurídicos, debe comprender que la armonización es sólo un elemento de análisis, y que la tensión, propia de sociedades democráticas, requiere espacios para materializar las hostilidades plurales de las identidades colectivas.

En términos generales, el principio de pluralidad tiene como componentes sustantivos: 1) la diversidad, 2) el disenso, 3) la hostilidad y 4) la interlocución de varios actores sociales y políticos. Específicamente la diversidad, significa variedad de ideas, éticas, filosofías y políticas. Multiplicidad de formas de vida, distintas voces del pueblo. Por su lado la hostilidad, representa la oposición y contrariedad, a proyectos políticos instituidos en la comunidad política, frecuentemente tiene una base social divergente, que busca

identificar las fallas del sistema político, y de esta manera ampliar el espectro de la hostilidad. (Cruz, 2017; p. 43-44).

El *disenso* es un valor democrático, contrario al consenso que representa el desacuerdo a posturas dadas, que vale la pena ampliar y reproducir, así como también construir marcos para la repolitización y revalorización de esta facultad política. Si una política, pretende ser democrática debe acudir fielmente al disenso, y ampliar los márgenes de disensión entre los ciudadanos, los partidos políticos, los movimientos sociales, pero también brindar todos los elementos necesarios para que el pueblo organizado se enfrente vía emancipación al Estado. (Cruz, 2017; p. 44).

La *interlocución* de varios actores sociales y políticos obliga a que la acción política de los movimientos sociales sea nutrida por el diálogo entre intereses contrapuestos, y de esta manera se legitime culturalmente el conflicto en la comunidad política. El dialogar es un instrumento que respalda la movilización social de intereses, pasiones y afectos. La pluralidad es un factor que activa el desencadenamiento de luchas políticas nacidas y recreadas por el pueblo. (Cruz, 2017; p. 44).

Ahora bien, con respecto al principio de participación, visto desde el punto de vista de la Ciencia Política encara procedimientos y propiedades de la política como objeto de estudio, sin embargo, está se ve condicionada por factores sociales y económicos, así como por las instituciones democráticas existentes en una sociedad. Pero la cuestión de la participación trasciende las fronteras de la política institucional propiamente dicha, por ejemplo, se identifican estructuras de organización social diversa en los movimientos sociales, tales como el movimiento feminista, LGTBI, ambientalista, obrero, étnico y campesino. (Cruz, 2017; p. 44).

Según la socióloga mexicana Jacqueline Peschard (1997); la participación de los movimientos sociales en la política democrática de un país presenta varios tipos de orientaciones, dentro de las cuales se destacan: la cognoscitiva, la afectiva, la evaluativa y la contestataria. En este orden de ideas, los objetos políticos susceptibles de participación son el sistema político en general, así como también los actores sociales como sujeto político básico.

Para Peschard (1997) los movimientos sociales cimientan su fuerza movilizadora en los siguientes puntos:

- Un alto involucramiento con la política.
- Una amplia convicción.
- Un buen número de miembros activos.
- Un alto orgullo por su proyecto político.

En este sentido, los componentes esenciales de la participación como principio garante de una democracia participativa transitan por la idea de una ciudadanía activa, representativa de diversos grupos sociales con iguales garantías ante la ley, es decir, el ciudadano en plural es el protagonista de la esfera pública. Como aspecto esencial en la participación de los movimientos sociales, se encuentra la necesidad que siente el cuerpo de activistas que dinamizan la política externa a la institucionalidad, de estar convencidos que se puede hacer algo, esto en politología se conoce como competencia o eficacia cívica, unidos a su vez, por lazos de cooperación ciudadana, lo cual facilita la confianza entre los miembros del proyecto político, que en definitiva es el enlace que los une.

Es así como las distintas acciones jurídicas observables en las identidades colectivas inclinan evidentemente a consentir que su participación tiene relación con una especie de insatisfacción social con el estado de cosas existente, una alta tendencia al despliegue de sus argumentos racionales, pasiones y afectos, así como la aceptación de un cambio radical, como opción política real. Sin embargo, cabe anotar en la misma dirección de Peschard (1997), que “Tampoco podrá florecer un principio de la participación democrática, si las instituciones gubernamentales y de representación funcionan a partir de criterios de unanimidad y no de construcción de disensos o desacuerdos capaces de recoger la pluralidad política de la sociedad.” (p. 42).

Teniendo en cuenta lo anterior, para que el principio de participación tenga vigencia normativa, es necesario una socialización política que extienda su radio de acción a la población para que esta aprenda y adhiera a su propia personalidad, la modalidad de la política contestaría como forma de participación democrática legítima, respecto a sus propiedades estas pueden ser de dos tipos: 1) manifiesta o directa, y 2) latente o indirecta.

Los factores socializadores que propulsan los movimientos sociales, para llenar de vida el principio de participación, se asientan en márgenes relacionados con: la amplitud con la que se difunden las nuevas ideas sobre la participación popular en la democracia participativa, el grado de exposición de los sujetos a dichas ideas, el prestigio histórico de las ideas en cuestión y el peso social específico que tenga el motor de las ideas.

Como noción básica, se establece que el Estado colombiano, no ha dinamizado en términos de decisión política la activación del principio de participación, en todos los procedimientos democráticos que se supone transversalmente estar cobijado. Tal oficio de socialización política, lo han tomado sectores históricamente excluidos por la política

electoral, como los movimientos sociales que han utilizado con buena actuación, los símbolos, que categóricamente son una representación de la comunidad política y social. Los símbolos, vale la pena profundizar tienen un bagaje histórico afianzado en nociones sobre el ámbito político, es decir, la obtención y la permanencia del poder.

De otro lado, se encuentra el principio de legalidad, para ello en este estudio se entiende por legalidad uno de los elementos de la cultura política democrática, es decir, el respeto a un orden jurídico objetivo.

Es así como la legalidad, cobra plena vigencia en el Estado colombiano, al considerarse un ingrediente fundamental para que toda acción gubernamental y operación jurídica, por señalar algunos casos, se haga de conformidad con lo establecido por la ley. Porque si existe algún procedimiento que atenta contra la legalidad, se producirá una afectación directa al sometido, en síntesis, “el principio de legalidad está para intervenir, cuando no exista el apego debido de la legalidad por parte del Estado en la afectación al subordinado.” (Islas, 2009; p. 98).

Ejemplo de lo argumentado hasta el momento se encuentra en los estudios políticos, donde se habla de la extensión del principio de legalidad a la actividad de los tribunales constitucionales, que mediante el ejercicio de las sentencias de constitucionalidad operan de acuerdo con la ley, y conforme a la constitución. La interpretación es para constitucionalistas como Rubio (1993) una auténtica forma de poder, ya que las decisiones de una corporación constitucional cobran plena fuerza vinculante, que es la razón de ser, de su existir institucional. En este mismo ámbito, rescatando algunos argumentos esbozados con anterioridad, los principios fundamentales de la protesta social en Colombia no sólo son principios de interpretación, sino que además tienen un valor normativo *per se*.

La legalidad no solo se asimila en el poder judicial, sino también en las instituciones gubernamentales, que en la última década han tenido que articular a sus procedimientos de gestión pública, la rendición de cuentas, que es poner a la acción de gobierno a responder y justificar el manejo del gasto público, dentro de muchas otras cuestiones, como refiere O'Donnell (2004). Se trata de equiparar a rango constitucional la igualdad de todos ante la ley. Aunque, los mecanismos de *accountability* propios de un Estado Democrático de Derecho, no constituyen una aplicación real en la vida de las personas, es decir, en cerrar la brecha rural-urbana, en la creación de una política económica equilibrada a la política social, en este sentido, el sistema democrático está en deuda con la esfera social que particularmente sea visto afectada, por la desigualdad de un sistema económico de clara ingesta neoliberal y corporativo.

Para el jurista y politólogo argentino Guillermo O'Donnell, el pilar de un Estado Social de Derecho en concomitancia con la democracia converge en el equilibrio entre derechos y obligaciones civiles, contenidos en una categoría de universalidad. En este orden de ideas, los componentes esenciales del citado Estado de Derecho deben propugnar un debido proceso de democratización en cada uno de los países de América Latina son:

- Mecanismos de *accountability* o rendición de cuentas vertical y horizontal.
- Articulación positiva entre legalidad y democracia.
- Derechos universales.
- Obligaciones universales.
- Igualdad ante la ley.

Seguramente existen múltiples objeciones a los planteamientos del profesor argentino, sin embargo, el objetivo es presentar la dimensión del principio de legalidad en un contexto de democracia participativa. Aún más específico, se busca presentar como el principio de legalidad en muchas ocasiones es utilizado para restringir el radio de acción de la protesta social en Colombia, como claramente ha sido descrito. Sin duda alguna, se identifica una directriz objetiva de subsumir la política como forma de organización social, mediante fórmulas jurídicas aparentemente armonizadas pero que, si se someten a un trato hermenéutico, terminan siendo contenidos normativos complejos desde el punto de vista político.

Avanzando en el esclarecimiento de la dimensión política a nivel normativo, que cobra el principio de legalidad, se asemeja que este “pretende evitar el abuso de poder, por lo que la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial es esencial, en la formación del Estado moderno.” (Montesquieu, 2001; p. 145). De esta cita, se pueden realizar varios planteamientos, pero se indicaron los que tienen vigencia para el presente capítulo.

En primer lugar, el combate contra el abuso del poder desde el Estado busca transmitir a la ciudadanía un conocimiento de lo que es justo y conveniente para el orden existente, no para las mayorías populares, sino para un grupo social específico que presenta nociones sobre el bien común, la imparcialidad e imperio de la ley, y la sapiencia y la virtud de los aplicadores del derecho. Y, en segundo lugar, el principio de legalidad es aquel en virtud del cual, los poderes públicos están sujetos a la ley, sin embargo, se aclara para quienes comparten la idea pulcra de la división de poderes, que está es un corolario de la doctrina política, que ve en la ley formal la expresión de la voluntad general, congreso y senado de la república, los cuales le son atribuidos a la acción legislativa.

Finalmente, el principio de legalidad fundamenta un marco de actuación, así como evita que se cometan graves errores al quebrantar el orden que debe proteger. La cuestión central en este punto es ¿qué tipo de orden se está definiendo?, si es un orden democrático, autoritario o totalitario, ya se hizo referencia en páginas anteriores como el cambio constitucional, o más bien la misma Constitución de un país, no asegura una esencia plural y participativa, sino al contrario es susceptible de muchas distorsiones.

No obstante, pese a la armonización formal que se hace en la Carta Política de 1991, el desarrollo jurisprudencial, legislación en la materia, literatura política y constitucional especializada, estos presupuestos axiológicos presentan una dimensión hostil, lo cual dificulta su despliegue en un contexto de democracia participativa.

Respecto a la dimensión normativa y política de los principios rectores de la protesta social en Colombia, Cruz (2017) señala que el principio de pluralidad, participación y legalidad, no son representaciones meramente legales, sino que disponen e indisponen, en ambos sentidos las condiciones sociales para que la acción política de las identidades colectivas en el país, tengan un despliegue dinámico, heterogéneo y participativo.

En este sentido, el profesor italiano Antonio Baldassarre (1997) llama la atención en torno a que el sujeto en tanto ser político e histórico, es construido por relaciones sociales, añadiría por relaciones sociales hostiles, por lo cual es fundamental articular a la parte normativa de la Carta Política, el principio de desobediencia, el derecho a oponerse, que es fundamental en la protesta social como mecanismo de contestación social directo. En detrimento de los dominios del principio de legalidad, el cual es necesario en una democracia, pero con límites claros. Le corresponderá a la política imponerle claros límites a la legalidad.

La protesta social al ser un mecanismo que, en su músculo, ostenta una forma de relación entre sujetos movilizados por distintos factores, encuentra en la democracia, una estructura de relaciones de poder útil para dotar de vida los principios de pluralidad y participación. Sin embargo, el principio de legalidad basado en una libertad natural proscribía la eventual primacía de la individualidad en tanto busca normalizar el descontento, mediante el mero reconocimiento legal.

Capítulo 2.

Normatividad para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta

La protesta es reconocida por ser un derecho fundamental, un derecho inherente al ser humano, imposible de transigir o limitar; inalienable, imprescriptible e intransferible. Los derechos fundamentales nacen y mueren con la persona y como afirma Ferrajoli (2013) son además “derechos que están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar...” (p. 117).

Pero ¿cómo se materializa este derecho fundamental? La protesta no solamente se materializa y garantiza a través de la Constitución Política de 1991, sino que además es respaldada por resoluciones emitidas por organizaciones internacionales de los cuales Colombia hace parte y que por lo tanto “está obligada a cumplir con las obligaciones contenidas en los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tanto en el Sistema Universal (Organización de Naciones Unidas, ONU) como en el Sistema Interamericano (Organización de los Estados Americanos, OEA).” (Vallejo, s.f; párra. 1).

El derecho a la protesta dentro del marco legal internacional no se encuentra taxativo como tal, sin embargo, se encuentra amparado con la integralidad de varios derechos que individualmente están relacionados entre sí, tales como: el derecho de asociación o reunión pacífica, libertad de expresión y huelga.

El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos¹ determina la importancia de los derechos de libertad de reunión y de asociación pacífica en la medida en

¹ El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) expresa: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de

que encausan el ejercicio de muchos otros derechos sociales, civiles, económicos, políticos y culturales, constituyéndose elementos esenciales de la democracia, ya que por medio de su ejercicio los seres humanos pueden proclamar sus opiniones de orden político, literario, artístico, cultural, religioso, económico, social o de cualquier otro aspecto. Así lo sostiene también la Resolución 15/21 del Consejo (Organización de las Naciones Unidas, 2010). Considerando la interrelación e interdependencia efectivas con otros derechos, la libertad de asociación y de expresión pacífica establecen en un inestimable indicador que permite identificar la medida en que los Estados respetan el disfrute de muchos otros derechos humanos.

El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos² también reconoce el derecho de reunión pacífica, sin embargo, el mismo artículo, dispone que “los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación no son absolutos”. Es por eso que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual monitorea la implementación del PIDCP, decidió que su próxima observación general recaería sobre este artículo del Pacto (Lalinde, 2019); dejando atrás la Resolución 15/21 (Organización de las Naciones Unidas, 2010) que en su momento respaldó contundentemente este acápite normativo determinando que estos derechos “pueden estar sujetos a ciertas limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en razón de la seguridad nacional o la integridad de

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

² El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) determina: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

la población, el orden público, la protección de la salud o de la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás” (párr. 4).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha ahondado en la íntima relación entre el derecho a la libertad de expresión y de reunión, al afirmar que “(...) en el momento de hacer un balance sobre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático” (CIDH, 2005; p. 93). De la misma forma, en su artículo 15³ reconoce el derecho de reunión, pero además fija un precedente sobre la no violencia y la no utilización de armas en la ejecución de ésta.

Un gran aporte fue realizado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965) que en el artículo 5 expresa el compromiso de los estados (que firmaron dicha convención) a respetar, entre otros, el derecho a la igualdad, en especial evitando la discriminación racial, que impida el goce de otros derechos, como los civiles, entre los que se encuentran a la libertad de reunión y de asociación pacíficas⁴.

³ El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) señala: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

⁴ La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965) expresa: “en conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos” siguientes:

(...)

d) Otros derechos civiles, en particular:

(...)

ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

Respecto de la libertad de expresión como derecho fundamental relacionado intrínsecamente con el derecho a la protesta en la normatividad internacional se puede mencionar, principalmente, a) la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Artículo 19), que contempla que dicho derecho incluye el no ser molestado a causa de las opiniones, y el de investigar y difundirlas por cualquier medio de expresión; b) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Artículo 19) donde, adicionalmente, contempla que este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales, y por tanto debe estar sujeto a ciertas restricciones de orden legal; c) la Declaración y Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo 4 y 13 respectivamente), y d) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. En materia internacional se indica que, a pesar de que el derecho de libertad de expresión es fundamental, ello no lo hace absoluto y de allí que se prevean limitaciones cuando su ejercicio contraría el respeto o la reputación de otras personas, la protección de la seguridad nacional, o la moral y el orden público (Burbano, 2018).

Otro derecho reconocido a nivel internacional y relacionado con la protesta es la huelga; un derecho fundamental que sólo puede ser ejercido por aquel con la calidad de “trabajador” y que, con el fin de conseguir mejoras laborales, sociales, económicas y hasta políticas; cesan indefinidamente sus actividades habituales determinadas en su contrato de trabajo para exigir una negociación a sus empleadores.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha pronunciado indirectamente sobre la huelga, vinculándola intrínsecamente con derechos fundamentales como la libertad sindical, la libertad de asociación y la libertad de negociación colectiva; emitiendo resoluciones, convenios y recomendaciones, en pro de garantizar el ejercicio de las

libertades anteriormente mencionadas, dentro del marco normativo y legal de cada Estado miembro de esta Organización. El asunto es que estas disposiciones denominadas de “soft law” en principio no son de carácter vinculante; sólo con el tiempo pueden producir efectos que emanan desde la doctrina jurisprudencial hasta el marco normativo interno.

Uno de los Convenios más representativos en materia sindical fue el Convenio 87 titulado “sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” en el que relacionó el derecho a la huelga con el término de organización sindical, definiendo éste como la asociación de trabajadores o empleadores que se reúnen con el fin de fomentar y defender sus derechos e intereses, formulando sus programas de acción en torno a la conformación del sindicato⁵. Por lo tanto, las autoridades públicas deben inhibirse de realizar intervenciones que limiten este derecho y que entorpezcan el ejercicio legal del mismo (art 3)⁶ (Organización Internacional del Trabajo, 1948).

Además, en la Resolución sobre la anulación de las leyes antisindicales, la OIT legitimó el derecho a la huelga protegiendo a aquellos trabajadores que participan en ésta, para que no sean despedidos de su empleo y no sean desmejorados laboralmente; para hacer efectiva esta resolución, creó además en el año 1950 una Comisión de investigación y conciliación en materia de libertad sindical.

⁵ El artículo 10 de Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación argumenta: “En el presente Convenio, el término **organización** significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores”. (Organización Internacional del Trabajo, 1948).

⁶ El artículo 3 de Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación expresa: “1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal” (Organización Internacional del Trabajo, 1948).

Ahora bien, en virtud del art. 93 de la Constitución Política⁷, y con base en el desarrollo jurisprudencial, estos instrumentos internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad –o sea, sus disposiciones tienen rango constitucional- y, en consecuencia, todas las normas legales y reglamentarias de rango inferior que se expidan al interior del Estado, deben ajustarse o estar conformes con lo previsto por los tratados internacionales; como afirma el profesor Ramelli (2004, citado por Olano, 2005):

El bloque de constitucionalidad está integrado por disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no gocen de rango constitucional. Su función es la de servir de referente necesario para la creación legal y para el control constitucional y estaría conformado por el articulado de la Constitución (incluido el preámbulo), las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, algunos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que admiten ser limitados bajo estados de excepción, y los instrumentos internacionales sobre límites. (p. 233).

En Colombia el derecho a la protesta es reconocido por la Constitución Política de 1991 en el artículo 37⁸ que precisa el poder del pueblo como constituyente primario para reunirse y llevar a cabo públicamente manifestaciones pacíficas; pero también otorga el poder al Congreso de la República para que, en algunos casos, y mediante una ley pueda limitar el ejercicio de éste.

⁷ El artículo 93 de Constitución Política de Colombia manifiesta: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él".

⁸ El artículo 37 de Constitución Política de Colombia manifiesta: "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho" (Comisión Nacional Constituyente, 1991; p. 7).

Para profundizar la relevancia normativa de la protesta; es primordial analizar el núcleo esencial de este derecho, el cual se desarrolla en el preámbulo de la constitución, en el ya mencionado artículo 37 y los artículos subsiguientes 85, 152 y 153; por cuanto en el preámbulo menciona los principios rectores y las aspiraciones del Estado Colombiano tales como la justicia, la libertad, el trabajo y la paz, los cuales deberán desarrollarse dentro de un marco jurídico, democrático y participativo; además el ya reiterado artículo 37 y teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional se colige que el núcleo esencial del derecho a la protesta se extrae el principio de democracia participativa del Estado Colombiano dado que para la Corte Constitucional y la Constituyente de 1991 no se concibe que “el derecho de reunión no pueda establecerse exclusivamente para la protesta. Es mucho más amplio y supone que una democracia participativa no puede entenderse sin este derecho de reunión” (Corte Constitucional, 1992, Sentencia T-456; p. 3).

Por otra parte el artículo 85 de la Constitución Política de Colombia⁹ determina que el artículo 37 es de inmediato cumplimiento; entendido el termino inmediato en el sentido gramatical de la palabra, es decir, no puede intermediar requisito, demora o trámite alguno para la consolidación del ya mencionado derecho; no sólo por remisión constitucional sino por encontrarse inmerso en los denominados derechos fundamentales de los cuales tienen sustento normativo en leyes supranacionales tales como los derechos del hombre y el ciudadano, el pacto de derechos civiles y políticos, convención americana de los derechos humanos entre otros los cuales han sido ratificados por Colombia.

⁹ El artículo 85 de Constitución Política de Colombia manifiesta: " Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 y 40" (Comisión Nacional Constituyente, 1991; p. 22).

Ya para finalizar, los artículos 152¹⁰ y 153¹¹ determinan que, respectivamente, la reglamentación de los derechos fundamentales deberá ser tramitada por medio del legislador estatutario y en caso de modificación o derogación se exige la mayoría absoluta del congreso y deberá efectuarse dentro de una legislatura. En suma, el núcleo esencial del derecho a la protesta nace de la suprema ley no solo para el ejercicio de la manifestación sino como mecanismo de los ciudadanos para la consolidación de una Estado pluralista, participativo, social, democrático y de derecho que se sirve de los principios rectores del preámbulo de la constitución desde donde se determina procedimientos especiales para su creación, ratificación y modificación.

Ya para finalizar el ámbito constitucional, la protesta social, además de tener una consagración autónoma en el artículo 37 de la Constitución, está estrechamente ligado a otros derechos de raigambre constitucional, como lo son el derecho a la libertad de expresión (art. 20), el derecho de petición (art. 23), el derecho de asociación (art. 38) y el derecho a participar en el control del poder político (art. 40), su relevancia en la Constitución de 1991 es más que evidente.

Siguiendo con el desglose normativo del derecho a la protesta en un sistema jurídico escalonado representado así por la pirámide “kelseniana”, es fundamental adentrarse a la Ley 599 de 2000 pilar sustancial del derecho penal y la Ley 1801 del 2016 que regula todo

¹⁰ El artículo 152 de Constitución Política de Colombia manifiesta: "Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b) Administración de justicia; c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; e) Estados de excepción" (Comisión Nacional Constituyente, 1991; p. 51).

¹¹ El artículo 153 de Constitución Política de Colombia manifiesta: "La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla." (Comisión Nacional Constituyente, 1991; p. 52).

lo concerniente al derecho policivo; ambos encaminados a regular y limitar el derecho a la protesta social.

En el ámbito penal no se habla de la protesta social como un tipo punible, pero si guarda relación directa algunos actos vinculados a ésta; actos que según el Código Penal conllevan a algún abuso o extralimitación y que por lo tanto merece un castigo. Puede parecer una paradoja hablar de un derecho fundamental y que su ejecución se encuentre indirectamente penalizado, sin embargo, existe el famoso “*ius puniendi*” que traduce derecho sancionador del Estado que se encarga de vigilar y controlar todo lo que contravenga los límites constitucionales respecto de la protesta (Burbano, 2018).

El capítulo III del Código Penal Colombiano titulado “De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones” (Congreso de la República, 2000; Ley 599, p. 17) incluye los tipos penales relacionados a las consecuencias de los actos “extralimitados” ejercidos en una protesta como la perturbación ilícita o daño grave realizada en un medio de transporte de servicio público, colectivo o de algún carro oficial (Art.353)¹²; aquel que incurra en este delito deberá pagar una multa de 13.33 hasta 75 SMLMV y con la nueva ley de seguridad ciudadana una pena privativa de la libertad entre 4 y 8 años.

El artículo consecutivo a éste es el 353A¹³, que fue adicionado por la Ley 1453 del 2011 y trata sobre la “obstrucción a vías públicas que afecten el orden público” (Congreso

¹² Artículo 353. “Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial.<Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

¹³ Artículo 353A. “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. <Artículo adicionado por el artículo 44 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña

de la República, 2000; p. 17) penaliza el hecho de incitar, constreñir y dirigir actos (ya sea de manera temporal o permanente) que obstaculicen las vías nacionales y toda la infraestructura de transporte, llegando a afectar derechos como el del trabajo, el del medio ambiente, la seguridad alimentaria, entre otros. Este artículo fue demandado y mediante sentencia C-742 del 2012 con M.P María Victoria Correa se explicó que esta obstrucción debe poner en riesgo o peligro derechos fundamentales de terceros, de lo contrario una detención así sería ilegal.

Los tipos penales anteriormente descritos tiene algo en común y es que atentan contra la seguridad pública como bien jurídico tutelado; un bien jurídico que es homogéneo y colectivo. El agravante está en que la afectación de éste trasgrede la convivencia pacífica de una ciudad y los intereses legítimos de un conglomerado social como la paz; un derecho que siempre ha sido catalogado exclusivamente como derecho colectivo, “extrayendo de su naturaleza la característica de fundamental, lo que conlleva a varios problemas adicionales que pueden desligar su reivindicación, garantía y protección.” (Cabra, 2015; p. 4).

Otra conducta punible relacionada con el derecho a la protesta es la asonada, descrita en el artículo 469¹⁴ como una manifestación tumultuosa que utiliza la violencia para reclamar a cualquier autoridad hacer u omitir algo en ejercicio de sus funciones. Este tipo punible se encuentra en el título XVIII que trata sobre los delitos contra el régimen constitucional y legal del Estado Colombiano, por ende, el bien jurídico tutelado aquí es la

o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”.

¹⁴ Artículo 469. “Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”.

estructura constitucional y cabe resaltar que ir en contra de esta meramente no es delito, lo que lo hace punible es utilizar la violencia o levantarse en armas.

Con todo lo que se ha dicho hasta ahora, es primordial ampliar el porqué de la creación de la ley de seguridad ciudadana que además de reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, Código de Infancia y Adolescencia; entre otros, también tiene como “finalidad” luchar contra el terrorismo en cualquiera de sus facetas y con la delincuencia organizada del Estado Colombiano. Esta ley no sólo cambia verbos rectores del tipo, sino que aumenta las penas privativas de la libertad o las multas a su antojo; convirtiéndose en un compendio fundamental para suplir esas necesidades represivas de cada una de las entidades responsables del control social como la Policía Nacional.

Por otro lado, la Ley 1801 del 2016 por la que se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia; ha dedicado un capítulo entero reglamentando indirectamente la protesta limitándola con situaciones similares; tales como: aglomeraciones en público, derecho de reunión, manifestaciones públicas y pacíficas.

Inicia con el artículo 47¹⁵ con el objetivo de definir las “aglomeraciones en público” como la reunión plural de personas previa a una concertación individual o colectiva, categorizándolas por sus características y requisitos de tres maneras:

- 1- Las manifestaciones o reuniones públicas y pacíficas.
- 2- Las actividades que inmiscuyen un número importante de personas en un espacio público pero que no son complejas.

¹⁵ El artículo 47 de la Ley 1801 de 2016 manifiesta: “Definición y clasificación de las aglomeraciones de público. Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a sus características y requisitos, se establecen tres categorías: 1. Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público; 2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas; 3. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas...” (Congreso de la República, 2016; p. 23).

- 3- Las actividades que también inmiscuyen un número importante de personas en un espacio público y sí son complejas.

El artículo siguiente (art 48¹⁶) reglamenta esta última categorización ordenando a las diferentes autoridades municipales y distritales de gestión del riesgo definir condiciones y requisitos para desarrollar a cabo de manera controlada y pacífica alguna de estas reuniones o aglomeraciones.

Para garantizar el ejercicio de estos derechos, el artículo 53 del Código Nacional de Policía y de Convivencia¹⁷ determina que todas las personas tienen la libertad de reunirse y manifestarse pacífica y públicamente con el fin de representar sus ideas e intereses culturales, políticos, económicos, sociales, religiosos o de cualquier otro tipo. Claro está que este artículo exige realizar un aviso por escrito, firmado por tres personas para ser presentado ante cualquier autoridad administrativa; expresando de manera detallada el día, el sitio, la hora y si es posible, el recorrido en el que se desarrollará la manifestación; todo esto con una antelación de 48 horas.

¹⁶ El artículo 48 de la Ley 1801 de 2016 manifiesta: “Las autoridades municipales en concurso con los consejos municipales y distritales de gestión del riesgo, reglamentarán las condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y no complejas de conformidad con lo expresado en este Código y con sujeción a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional” (Congreso de la República, 2016; p. 23-24).

¹⁷ El artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 manifiesta: “Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo. Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas. Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado. Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta. Parágrafo 1°. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se considerarán por sí mismas como alteraciones a la convivencia. Parágrafo 2°. El que irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal, será objeto de aplicación de medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 4.” (Congreso de la República, 2016; p. 25).

Los artículos 54¹⁸ y 55¹⁹ subsiguientes son apartes normativos encaminados a proteger el derecho a la protesta; el primero con el fin de recordarle a los alcaldes, gobernadores y cualquier otra autoridad administrativa el deber de autorizar el uso temporal de las vías y de crear planes efectivos de desvíos alternos para la movilización de los manifestantes como de los ciudadanos que no hacen parte de ésta; el segundo con el propósito de prohibir mensajes engañosos en torno a la manifestación o con señalamientos falsos en relación de los involucrados en la protesta con grupos armados ilegales, o cualquier cosa o situación que intente deslegitimar la manifestación.

No obstante la Corte Constitucional, mediante sentencia C-223/17 declaró inexecutable los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, los cuales hace parte del “Título VI del Libro Segundo” de la Ley 1801 de 2016, así como el artículo 162, por la cual se expidió el Código de Policía y Convivencia; articulado que pese a que no tiene mayor conexidad con la protesta social fue una decisión motivada “por violación de la reserva de Ley Estatutaria establecida en el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política. Los efectos de la anterior declaración de inexecutable se difirieron por un término no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de

¹⁸ El artículo 54 de la Ley 1801 de 2016 manifiesta: “Uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. Los alcaldes distritales o municipales, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, deberán autorizar el uso temporal de vías dentro de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. En el caso de las vías arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos.” (Congreso de la República, 2016; p. 25).

¹⁹ El artículo 55 de la Ley 1801 de 2016 manifiesta: “Protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados. Con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica.” (Congreso de la República, 2016; p. 26).

2019” (Corte Constitucional, 2017; p. 57), lo cual deja ver que existía normatividad no procedente en esta ley.

En su análisis, la Corte Constitucional da explicaciones sobre el carácter fundamental de los derechos de reunión y manifestación pública pacífica, marcando el reconocimiento expreso realizado en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional, así como el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, a través de su jurisprudencia, insistió en la interdependencia y la interrelación que existe entre los derechos fundamentales de manifestación pública pacífica, reunión, libertad de expresión y los derechos políticos, hecho que resulta determinante para el examen del cargo de violación de reserva de ley estatutaria por las normas demandadas del Código Nacional de Policía y Convivencia.

Sin embargo, en la parte resolutive de la sentencia C-223 del 2017 la Corte decidió sobre las demandas formuladas en contra de algunas normas contenidas en este Código (Ley 1801 de 2016) bajo tres cargos: (i) la inconstitucionalidad de los artículos 47, 48, 53, 54 y 55 de la Ley 1801 de 2016, por violar la reserva de ley estatutaria sobre derechos fundamentales dispuesta en los artículos 152 y 153 de la Constitución; (ii) la inconstitucionalidad del artículo 48, que faculta a las autoridades municipales para reglamentar las condiciones y requisitos de desarrollo del derecho de reunión y manifestación pública, por violar la reserva de ley establecida en el artículo 37 de la Constitución; y (iii) la inconstitucionalidad del artículo 162 de la Ley 1801 de 2016, que faculta a los alcaldes municipales a “dictar mandamiento escrito para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público”, por violar el artículo 28 de la Constitución (Corte Constitucional, 2017; p. 68).

En fin, la Corte Constitucional procedió a la solución del cargo de inconstitucionalidad, para ello aplicó los lineamientos de evaluación de la reserva sobre los “derechos y deberes fundamentales de las personas” edificados por la jurisprudencia, entre las cuales se encuentran las sentencias C-007 de 2017, C-044 de 2015, C-511 de 2013, C-818 de 2011, C-226 de 2008 y C-646 de 2001, lo que le permitió concluir que la normatividad inserta en el “Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016”, titulado “Del derecho de reunión”, radicaba en una regulación integral de los derechos fundamentales de reunión y protesta pública pacífica, los cuales inciden directamente en los derechos concurrentes e interrelacionados de los derechos políticos y libertad de expresión, que trataba sobre los principios básicos y los elementos estructurales de esos mismos derechos, en el sentido de haber consagrado restricciones, límites, prohibiciones y excepciones, motivando a que dicha regulación tenga que ser expedida por los procedimientos de la ley estatutaria y no por los de la ley ordinaria, como ya se realizó, por tal motivo la Corte procedió a la declaratoria de inexecutable, concediendo un plazo al Congreso de la República hasta el 20 de junio del año en transcurso para que expidiese la normatividad respectiva, en ejercicio de sus competencias constitucionales; plazo que ya expiró. En el siguiente ítem se analizarán las posibles consecuencias de esta omisión legislativa.

A nivel reglamentario, sobre el derecho a la protesta se han emitido algunos actos administrativos que sirven como referente interpretativo sobre el derecho en materia y que, además, son de carácter vinculante. Uno de ellos es la Directiva 008 del 2016 que emitió el ex Fiscal General de la Nación Luis Eduardo Montealegre y que por medio de la cual

estableció lineamientos con respecto a delitos en los que se puede incurrir en curso de la protesta social.

Básicamente, la Directiva 008 determina que aquel que ejerza este derecho cometiendo actos de violencia o por medios violentos, podrá ser detenido, investigado y judicializado por la autoridad pública pertinente. Precisando el concepto de violencia sobre el uso desproporcionado de la fuerza aplicada a una o varias personas. Los delitos en los que podría incurrir son: el daño en bien ajeno (art. 265, C.P), incendio (art.350, C.P), disparo de arma de fuego contra vehículo (art.356, C.P), empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas (art.359, C.P) y violencia contra servidor público (art.429, C.P).

En este orden de ideas, las denuncias con ocasión a la perturbación en el servicio de transporte público, oficial, colectivo o la simple obstrucción de alguna vía pública que, sin ejercer la violencia, alteran el orden público, deben ser inadmitidas por su atipicidad. Así mismo, el delito de asonada debe realizarse:

A título de dolo, que se cause un daño contra la integridad de las personas o se produzca un daño muy grave a un bien; así mismo, cuando en el desarrollo de una protesta social se incurra en una conducta punible, deberá evaluarse si aplica alguna de las causales del principio de oportunidad, especialmente aquellas previstas en los numerales 12, 13 y 14 del artículo 324 de la legislación procesal penal. (Legis, 2016)

Por otro lado, y siguiendo con el orden reglamentario, se encuentra la Resolución 1190 del 2018 emitida por el Ministerio del Interior mediante la cual se adopta el:

Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la

participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica. (Ministerio del Interior, 2018).

Esta resolución no modifica ninguna normatividad, por el contrario, es una guía metodológica para que cada una de las dependencias del Ministerio del Interior y otras entidades públicas, tengan una referencia conceptual sobre la protesta social, y la importancia constitucional que tiene este derecho en relación con otros, como el de asociación y reunión pacífica. Además, crea algunas instancias como la Mesa de Seguimiento, el Puesto de Mando Unificado (PMU) y las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil para que coordinen la logística de las manifestaciones creando planes de movilidad y medidas de seguridad para los que participan y los que no en la protesta.

Desde otro punto de vista y en el desarrollo de una paz sostenible, en los acuerdos firmados entre el Gobierno Colombiano y las FARC, en La Habana, fue incluido el tema del ejercicio del derecho a la protesta, dentro del punto de Participación Política, concretamente en el ítem 2.2.2 “Garantías para la movilización y protesta”, bajo la premisa que su práctica “enriquece la inclusión política y forja una ciudadanía crítica dispuesta al diálogo social y a la construcción colectiva de la Nación” (Mesa de Negociaciones, 2013; p. 9). Para la solidificación de estas acciones destinadas a dotar de garantías su ejercicio, se prevé la creación de una Comisión Especial para la Paz conformada entre otros por organizaciones sociales y “otros sectores interesados” (Mesa de Negociaciones, 2013; p. 9), con competencia sobre “i) revisión de normas que se aplican a la movilización social, ii) garantías para el respeto de los derechos humanos, iii) fortalecimiento de vigilancia y control de medios utilizados por las autoridades para tratar este tipo de actividades, iv) garantías

para el diálogo y seguimiento de los acuerdos, v) acompañamiento del Ministerio Público como garante de las libertades democráticas” (Mesa de Negociaciones, 2013; p. 10).

Es posible que, con el fin de la guerra respecto de este grupo guerrillero haya un incremento de la protesta social, sin embargo, la ampliación democrática, la revisión del marco normativo y las garantías para la manifestación pública son propósitos expresos que legitiman este acuerdo y entender el tratamiento que hoy recibe la protesta social en Colombia y la forma como debería ser regulada es esencial para el cumplimiento de los compromisos de paz (Lalinde, 2019).

2.1. Crítica a la normatividad sobre el derecho a la protesta

En el subtítulo anterior, al describir los artículos 353 y 353A en el Código Penal (Ley 599 de 2000) las conductas que allí se enuncian en relación con la perturbación del servicio de transporte y la obstrucción a vías públicas; es factible inferir que estos supuestos no cumplen con los requisitos del derecho penal liberal para ser tipificadas como delitos, como sea que la indeterminación de los tipos penales podría dar lugar a criminalizar en algunos casos actos propios de la protesta social. Y como actos propios de la protesta está llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre determinada situación, por ende, es natural que con ese fin los manifestantes busquen generar molestias razonables en los ciudadanos y afectar el curso rutinario de sus vidas. Si las personas y las autoridades no sienten ninguna alteración en su cotidianidad, si no encuentran mayor tráfico vehicular en las vías que transitan y si no llegan tarde a sus compromisos.

Precisamente, la Corte Constitucional se pronunció sobre la idoneidad de estos artículos y reiteró en la sentencia C-742 de 2012, que para que se entienda como cometida

la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, no basta con la simple obstrucción, sino que debe poner en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros.

La Corte, además, explicó el contexto en que debían ser entendidos estos delitos, ya que lo que se sanciona es que las manifestaciones dentro del ejercicio del derecho a la protesta se realicen por medio de actos violentos y, en especial, a través del uso de las armas.

Respecto del párrafo del artículo 353A en el que se excluyen de ser intervenidas u obstaculizadas “las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente”, la Corte Constitucional recalcó que no se requiere de un permiso para ejercer el derecho a la protesta; se trata más bien de una notificación o deber de informar a las autoridades sobre su realización.

En conclusión, los artículos fueron declarados exequibles y, por ende, ajustados al derecho penal respecto de la connotación constitucional; sin embargo, fue necesario explicar la interpretación de los artículos y los límites en el ejercicio de éstos, con la finalidad de evitar leyes que previendo restricciones afecten la esencia de un derecho fundamental como es, en este caso, el derecho a la protesta.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos sobre la libertad de circulación (1999), según la cual “al aprobar leyes que prevean restricciones (...) los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho (...), no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción”. Por lo tanto, cuando el Estado colombiano quiera restringir el derecho en estudio, las normas deben tener todas las condiciones aludidas. En consecuencia, ninguna restricción que imponen estas leyes sería legal si analizamos que afectan directamente el núcleo esencial del derecho a la protesta.

De lo anterior, es importante citar un párrafo del salvamento de voto que realizó el magistrado Jorge Iván Palacio Palacio en el que determina que:

La exequibilidad de los artículos demandados constituye una afrenta contra el ideal democrático por doble vía. Primero porque criminalizar la protesta en términos tan indeterminados constituye una estrategia para prevenir y suprimir las declaraciones de las partes más frágiles y olvidadas de la ciudadanía y, en la práctica, se convierte en una vía para impedir que determinadas partes del pueblo, particularmente las que tienen restricciones para acceder a los medios de información, den a conocer sus carencias así como sus necesidades y presionen la formulación e implementación de las políticas públicas correspondientes. (Corte Constitucional, 2012, sentencia C-742).

Por consiguiente, el derecho a la protesta social debería ser resguardado en una democracia, por lo menos, por las siguientes razones: primero, se encuentra conexo a los derechos de asociación, reunión y expresión, los cuales son previstos como condicionales necesario para dar el título de democrático a un régimen político, incluso en las perspectivas minimalistas de la democracia (Linz, 1993). Segundo, ya que garantiza la existencia de pluralidad, siendo la base de cualquier democracia. Tercero, puesto que en un régimen democrático los ciudadanos tienen la función de controlar la gestión del gobierno, por lo que poseer la libertad de protestar se convierte en prenda de garantía de que el Gobierno no se exagerará o se desviará en el ejercicio del poder público. Cuarto, la protesta social deberá ser protegida haciendo parte de la protección a las minorías de cualquier tipo, ya que un régimen político no se considera democrático si las minorías no tienen los mismos derechos y oportunidades que las mayorías (Gargarella, 2012). Y, quinto, la protección del derecho a la protesta pacífica se encuentra respaldada por el requerimiento de asegurar la presencia los

argumentos en el debate público de aquellos ciudadanos con recursos limitados, que no les permite hacer oír su voz (Gargarella, 2007).

Algunos autores señalan que hay graves conflictos en nuestra Constitución Política, y el Código Penal en conjunto con la Ley de Seguridad Ciudadana relacionados con el derecho a la protesta (Gargarella, 2010; Espinosa, 2014), que desembocan una tensión originada en un doble compromiso: por un lado, resguardar a las mayorías, a las ambiciones democráticas, esto se traducen en proteger lo que la gente quiere; y por otro lado, proteger a las minorías, conjugando efectivamente los derechos de cada individuo. De guiarse por el ideal democrático, habría que pensar en términos de identificar lo que la mayoría quiere y el alcance de la voluntad de las mayorías. Aunque cuando se piensa en el compromiso con los derechos individuales, se comienza a pensar en un tema contradictorio con lo primero, pues también se da el caso que, pese a que la mayoría insista reiteradamente en determinado reclamo fundamentado, existen cosas que no le pueden ser concedidas. Es precisamente allí donde se empieza a vislumbrar el conflicto presente sobre la protesta social, pues ésta siempre conlleva a esa tensión entre las aspiraciones democráticas y las preocupaciones por los derechos de cada uno.

Ahora bien, en cuanto al derecho policivo es aquí donde se decanta las máximas transgresiones y contradicciones al Estado Social y Democrático de Derecho colombiano al vulnerarse de manera ilegítima el derecho fundamental a la protesta, debido a las ambigüedades, la desproporción de sus procedimientos, calificativos y medidas; además de incurrir en un autorizado despotismo para vulnerar las libertades ciudadanas, esto consagrado en el actual Código Nacional de Policía.

Para comenzar el mencionado cuerpo normativo fue expedido mediante la Ley 1801 del año 2016, lo cual entre sus propósitos tenía el de mantener las condiciones necesarias para la convivencia dentro del territorio nacional, a pesar, persiste un desmedro, para las garantías y libertades ciudadanas entre éstas el derecho a la protesta. El nuevo Código Nacional de Policía sostiene como pretexto mejorar las relaciones de convivencia entre ciudadanos, sin embargo, el fin es concentrar poderes en cabeza de la policía nacional delegándole funciones judiciales sin advertir en la vulneración del derecho fundamental a la protesta, Yulisa Pilar Ramos Quintero (2016), evidencia la transgresión desde el artículo 47° hasta el artículo 75° del ya mencionado Código. Entre éstas se consagra un meticuloso número de requisitos para llevar a cabo una manifestación, tales como boletas e invitaciones para asistir a las movilizaciones las cuales deberán portar los asistentes y serán requeridas según sea el caso por la Policía Nacional (artículo 52), la misma norma en el párrafo del artículo 47 determina que el gobierno nacional deberá reglamentar normas para la clasificación de la protesta social según, la infraestructura, características de los asistentes, edad, lugar donde se desarrolla etc., además impone el deber a los asistentes de avisar a las autoridades administrativas de cuando, quienes, cómo y dónde se llevara a cabo una manifestación, indicando el número de asistentes, las rutas en que ésta se desenvuelve y su duración, so pena de ser rechazada la protestas por parte de la autoridad administrativa (artículo 53 y 54) , al respecto hay que señalar que el artículo 85 de la constitución política de Colombia menciona que el artículo 37 (entre otros derechos fundamentales) es de inmediato cumplimiento, además en el año 2005 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menciona que dado el caso

en que el aviso constituya una autorización para el ejercicio de la manifestación se perpetua una flagrante vulneración al derecho fundamental a la protesta.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el imperativo cumplimiento de las características y requisitos contenidos en el vigente Código Nacional de Policía, expuestos a la luz de la norma constitucional y las directrices de los organismos internacionales el derecho fundamental a la protesta no se puede condicionar, obstaculizar, ni transgredir y su cumplimiento se debe efectuar de manera inmediata.

También es importante sobresaltar algunas ambigüedades incluidas en este cuerpo pueden desembocar en extralimitaciones de la fuerza pública por exponer espectros interpretativos amplios, tales como el fin legítimo que debe tener la protesta social para desenvolverse (artículo 52), ¿cómo hacen las autoridades para determinar un fin legítimo cuando en su propósito institucional esta propender por la defensa del orden constitucional y legal, teniendo en cuenta que la protesta o la manifestación surge con ocasión al descontento colectivo en contra del actuar estatal, contra una norma o cuando no existe una norma? La manifestación es la negación del Estado o por lo menos parte de su política de gobierno, no es legítimo que las autoridades determinen cual es un fin legítimo válido.

Se presta también para confusiones debido a que el legislador en el Código Nacional de Policía y de Convivencia no diferencia entre colectivos en la manifestación y eventos con fines distintos a expresar el inconformismo colectivo, tales como fiestas folclóricas, eventos taurinos entre otros, y los etiqueta como aglomeraciones complejas o no complejas, entonces ¿cómo el legislador encomienda al gobierno en el parágrafo del artículo 47 la clasificación de la protesta social cuando en su contenido la asimila a eventos folclóricos distintos a causar un cambio político y social? o ¿cómo procederán a las autoridades ante manifestaciones

sociales con matices étnicas autóctonas que pretendan reclamar un derecho propio de su cultura, cosmogonía o territorio sin confundirlo con un evento festivo?

Siendo así, es importante ceñir los términos con los que se refiere el legislador al derecho fundamental para evitar ambigüedades y confusiones a fin de propiciar escenarios de abuso de poder o descalificación de las manifestaciones sociales, haciendo mecanismos expeditos y reglamentar la protesta para que se pueda desarrollar en términos pacíficos, sin más requisitos que garantizar la integridad de quienes la componen.

Ya para finalizar, es desdeñable para una república democrática y pluralista concentrar poderes judiciales a quienes se les encomienda seguir las meras instrucciones de la ley o darles facultades legislativas a los jefes de las autoridades administrativas de los municipios, esto en razón, primero, se le faculta a la policía nacional para que aprehenda a quienes, según su juicio, se encuentre deambulando bajo efectos sicoactivos o bajo los efectos del alcohol (Numeral 3°, artículo 155), presupone el uso de juicios subjetivos para determinar el grado y bajo qué sustancia se encuentra quienes estén participando de una manifestación, lo cual configura un abuso de poder, una vulneración al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y a las demás libertades ciudadanas. Segundo, los poderes delegados en virtud del artículo 16 del Código Nacional de Policía a los alcaldes de los municipios para que éstos expidan normas transitorias en materia policiva sin hacerles un control previo, lo cual supone un despotismo injustificado, sin ningún tipo de control de legalidad en este tipo de actuaciones por parte de los alcaldes y gobernadores. Cabe resaltar que es a estas autoridades administrativas (gobernadores y alcaldes) a quienes se les debe solicitar autorización previa para el desarrollo de una manifestación, con el lleno de los requisitos que menciona el Código de Policía. Lo anterior,

desdice de la estructura institucional de un país con tradición republicana, autorizándole proferir normas en materia de seguridad ciudadana a quienes no deberían tener esa potestad.

Hay que advertir que mediante la sentencia C-223 de 2017, algunos de los artículos mencionados, específicamente los que se refieren al derecho a la reunión consagrados desde el artículo 47 hasta el artículo 70, salvo el artículo 155, fueron declarados por la Corte Constitucional con inexecuibilidad diferida (debido a los vicios de trámite que adolece) hasta el 20 de Junio de 2019, lo cual quiere decir que desde su promulgación (20 de junio de 2016) hasta la mencionada fecha el dicho articulado mantuvo sus efectos junto con sus defectos, dándole autorización expresa al Congreso de la República para que legislara sobre el tema, el cometido al no sacarlos de plano del ordenamiento jurídico por parte de la Corte fue no dejar un vacío normativo, evitando así causar un daño más gravosos para el orden legal y social colombiano en materia del derecho a la protesta. Llegada la vigencia normativa de los artículos ya mencionados, aun el Congreso de la República no se ha referido a las reglamentaciones encomendadas por la Corte Constitucional en la mencionada providencia; el articulado es caduco y sin vigencia, y las consecuencias que la corporación pretendía mitigar por medio de la inexecuibilidad diferida se están causando. Ahora, el Congreso afronta esta crisis latente, para estas legislaturas o las próximas, ya que tiene el deber no sólo por las recomendaciones de la Corte sino por las necesidades sociales, de atender a las coyunturas actuales para reglamentar el derecho a la protesta respetando el orden constitucional a fin de no afectar libertades ni menoscabar derechos fundamentales. El propósito es dejar constancia sobre las regresiones que planteo el Código Nacional de Policía en materia de libertades ciudadanas y los desafíos que afronta el órgano legislativo para

preservar el orden constitucional y social, pero sobre todo la afectación flagrante al derecho fundamental a la protesta.

Para terminar, es importante aclarar como bien lo plantea Gargarella (2007), para nada se trata de negar o mitigar la importancia de los derechos colectivos como la libertad de locomoción o garantía de acceso que se encuentran limitados en el desarrollo de una manifestación; de lo que sí se trata es de reconocer la importancia del derecho a la protesta social como herramienta para la defensa de las condiciones pertinentes para el desarrollo de la democracia constitucional, el óptimo funcionamiento de las instituciones republicanas y el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. Darle el reconocimiento de derecho fundamental a la protesta y ponerlo en práctica se traduce en defender la legalidad de los procesos de resistencia y transformación social, todo ello buscando un mundo mejor para todos.

Capítulo 3. Análisis del ejercicio del derecho a la protesta en Colombia

El derecho de a la protesta social puede efectivamente implicar alguna afectación del orden público, especialmente en consideración a que las manifestaciones son ejercidas continuamente por grupos y colectivos que se encuentran apartados del debate público. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (1994), en su Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha manifestado que “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del “orden público” (p. 7), como medio para suprimir un “derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real” (CIDH, 1994; p. 7). Si esto ocurre, “la restricción aplicada de esa manera no es legítima” (CIDH, 1994; p. 9). Tal como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia (1992), no se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo *per se*.

La Corte Europea de Derechos Humanos (2011) ha manifestado a través de una sentencia que “en ausencia de actos de violencia por parte de los manifestantes, al menos antes de utilizar la fuerza por parte de la policía, es importante que los poderes públicos demuestren una especial tolerancia hacia las concentraciones pacíficas para no privar de contenido la libertad de reunión garantizada por el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos” (párr. 30)²⁰, por lo que se entiende que las restricciones al derecho a la protesta pacífica no deben constituir un obstáculo para el orden público.

²⁰ Es preciso hacer memoria ~~que~~ **que** ~~que~~, en el caso de España, el gobierno, ante el llamado movimiento “de los indignados del 15 M” que ocupó plazas de diversos lugares del país días antes de una elección a nivel de Municipios

Es importante resaltar que cada una de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aluden a la facultad del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, determinando que ésta no es ilimitada, por el contrario, está sometida a estrictos estándares de proporcionalidad, en especial considerando que los derechos comúnmente afectados son el derecho a la vida y a la integridad física. En este sentido la Corte IDH (1989) ha señalado que “está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana” (párr. 75)

Por otro lado, podemos determinar que el derecho a la protesta se materializa con una serie de acciones colectivas de carácter público y sostenido, en busca de transponer a las autoridades las reclamaciones colectivas (Tilly y Wood, 2010). Pese a que, por lo general, se encuentra emparentada a movimientos sociales, estos son fenómenos distintos, pues la protesta puede surtir un carácter coyuntural con algún grado de espontaneidad, en cambio los movimientos poseen niveles mayores de permanencia y organización, y tienen la oportunidad de elegir entre un repertorio de acciones (Godás, 2007).

Aunque esta parte de los acuerdos de paz aún se encuentra en edificación, no obstante un informe del CINEP (2019) manifiesta que, en cuanto a las garantías para la movilización

y Comunidades Autónomas, decidió no desalojar las plazas precisamente en base a la citada jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.

y la protesta social en Colombia , a principio del mes de febrero del presente año la Unidad Policial para la Edificación de la Paz publicó los resultados parciales de un proyecto que viene liderando hace unos meses cuyo propósito fundamental es impulsar un modelo de policía de diálogo y mediación que actúe antes, durante y después de los eventos de protesta social bajo una orientación diferente al del uso de la fuerza como usualmente ha sucedido con el Escuadrón Móvil Antidisturbios “ESMAD”. El proyecto se desarrolla con intervenciones piloto en cinco municipios del país y, por lo tanto, su impacto a nivel nacional no se ha sentido.

Además, hay que apuntar que en el año 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) recomendó a los Estados “[a] adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas” (recomendación 12). Específicamente, la Comisión anotó que la recomendación a los Estados para que establecieran medidas integrales en las cuales se incluyeran prevención, planificación e investigación con el fin de determinar el presunto uso excesivo de la fuerza en hechos de protesta social. También la CIDH señaló el contenido del derecho de reunión que se tiene la obligación de garantizar y respetar los Estados y, al igual, señaló varios de los obstáculos que, acorde con la consulta pública para la elaboración de su informe, prosiguen enfrentándose en algunos países de la región.

Por el contrario, el Estado colombiano continúa utilizando múltiples y desmesurados mecanismos represivos para reaccionar con una violencia que las autoridades públicas sustentan “legítima” contra manifestantes, y que cuya consecuencia ha sido el detrimento y perjuicio no sólo del ejercicio de su derecho a protestar sino de su dignidad como seres humanos, con afectaciones a su salud corporal y psicológica causando consecuencias

irreversibles o en definitiva la muerte, como se puede evidenciar más adelante en los casos documentados por el CINEP (2008a; 2008b).

Frente a estas acciones de estigmatización, violencia y criminalización emprendidas contra los manifestantes, no existen efectivos controles por parte del Ministerio Público, ni una administración de justicia que actúe para sancionar violaciones a derechos humanos en el marco de protestas, como tampoco un marco institucional adecuado para garantizar la participación ciudadana en tiempos de paz (Ortegón, 2016).

De acuerdo con Ortegón (2016) uno de los actores que ejerce mayor violencia contra la ciudadanía es el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD que desde su creación en 1999, organizaciones de derechos humanos se han dado a la tarea de documentar extensamente un catálogo de violaciones a los derechos humanos en conexidad con otros derechos protegidos internacionalmente y que le atribuyen tales como: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, uso de armas no convencionales, agresiones sexuales, decomisos ilegales, entre otras.

En este sentido, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, entre 2002 y 2012 se documentaron 132 casos de presuntas ejecuciones atribuidas a la Policía Nacional, periodo en el que también se registraron 512 casos de detención arbitraria, 596 heridos y 73 casos de tortura por móviles de abuso de autoridad (Rozo, 2013, p. 41).

Como ejemplo de estos casos, documentados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP (2008) se encuentran los siguientes:

El 1° de agosto, estudiantes, profesores y trabajadores de varias facultades de la Universidad Industrial de Santander -UIS- fueron amenazados de muerte por las “Águilas

Negras”, en el contexto de varias jornadas de protesta contra el nuevo Plan de Desarrollo que lesiona el derecho a la educación pública, eventos que a su vez fueron duramente reprimidos por el ESMAD, la Policía, la gobernación, la alcaldía y los medios masivos de información, con miras a estigmatizar, desactivar y aterrorizar el movimiento y a las organizaciones universitarias que los impulsan como SINTRAUNICOL y la ACEU (CINEP, 2008a; CINEP, 2008b) .

El 14 de agosto en Popayán, la policía y el ESMAD siguieron a 2 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en vehículos de vidrios polarizados, los detuvieron y sometieron a tratos humillantes y degradantes, les quitaron una cámara y cuando un abogado se presentó a defenderlos, los victimarios afirmaron que estaban atendiendo una petición de las directivas de la Universidad del Cauca y los acusaron de “distribuir propaganda de dudosa procedencia”, de “recoger imágenes sin destinatario definido” y de “presionar a estudiantes para participar en una marcha” (CINEP, 2008a).

El 10 de octubre un grupo del ESMAD atacó a los estudiantes que participaban en una concentración en Pasto, hiriéndolos con balas de goma y golpes de bolillos y lanzándoles gases lacrimógenos. Uno de los estudiantes perdió un ojo (CINEP, 2008a).

El 21 de julio en el caserío Curazao de San Juan del Cesar, los paramilitares ejecutaron al indígena Wiwa Pedro Montero, justo un día antes de realizarse la concentración convocada por los Wiwas para protestar por la desviación del Río Ranchería y la construcción de una represa allí (CINEP, 2008a).

El 10 de octubre de 2007 tropas adscritas a las Fuerzas Especiales de Contraguerrilla y a la Policía Militar del Ejército Nacional y Unidades del ESMAD, Policía Nacional violaron los derechos humanos de los campesinos, afrodescendientes e indígenas que

participaban en una jornada dentro de la Movilización Nacional Agraria y Popular, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao (Cauca). Señala la fuente que los distintos estamentos militares agredieron por tierra y aire a través de gases lacrimógenos, explosivos, balas de goma y proyectiles de fusil a los manifestantes. La protesta que fue estigmatizada por las autoridades civiles y militares y señalada de ser impulsada por las FARC-EP, permite entrever la disposición mental y deliberada de las Fuerzas Militares para reprimir violentamente a los ciudadanos y ciudadanas que vencieron las amenazas y se atrevieron a hacer efectivo el derecho legítimo de la protesta. Algunos de las víctimas heridas fueron: Evangelista Taquinas, herida en la cabeza con un ladrillo que lanzó un agente del ESMAD; José Eduardo Tombe y Juan Guillermo Marín pérdida de varios dedos de sus manos, Edgardo Muñoz, quemaduras de segundo grado y esquirlas en el cuerpo, las tres últimas víctimas fueron afectadas a causa de la explosión de un artefacto cargado con metralla de vidrios y aluminio, lanzado a través de mortero por integrantes de la Policía Militar. Por su parte los detenidos arbitrariamente fueron: Víctor Coicue, Eliver Cuetia, Jose Norbey Yule, Samuel Ocue, Luis Enrique Castrillón y Amadeo Largo. Paralelo a la victimización de la comunidad, la Fuerza Pública impidió la atención médica de los heridos lo que complicó la situación de algunos de ellos, lo que a su vez se convierte en una infracción al DIH al impedir la acción de la Misión Médica (CINEP, 2008a).

El 22 de noviembre Miembros del ESMAD de la Policía Nacional, en una acción desmedida y desproporcionada de la fuerza, ejecutaron a dos personas entre ellas una menor de edad e hirieron a cuatro personas más. Los hechos se presentaron cuando el ESMAD llegó a la población a disolver una protesta pacífica que los habitantes de este municipio realizaban para llamar la atención ante el peligro inminente de desbordamiento del Canal de

Dique, originado por la fuerte ola invernal que azotó al país. Los gases lacrimógenos lanzados por la policía le causaron la muerte a la niña Laurise Rivera Fontalvo de 3 años de edad; ante la persistencia del pueblo y con la llegada de refuerzos hombres armados empezaron a disparar en contra de la población indefensa, dejando heridos a Ezequiel Ortiz Ospino de 41 años, Wilmer Polo Cassiani de 31 años, Julio Rojano Matute de 17 años, a una cuarta persona de la que se desconoce el nombre y muerto a Xavier Alfonso Eljaick Eljach de 18 años de edad, a quien un proyectil impactó su rostro (CINEP, 2008a).

En términos generales, la represión es una de las formas que tienen a su disposición el Estado para contener las protestas sociales cuando se ven vulnerados derechos de terceros, y que aplicada a través de sus autoridades (Della-Porta y Diani, 2011). Para dar una mirada al comportamiento de la represión y criminalización de la protesta en Colombia se presentan a continuación hechos sucedidos entre los años 2010 a 2014.

Para empezar, según la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular “CINEP” (2014), en el periodo analizado hubo un incremento de luchas sociales, definidas como la reunión de más de diez personas en un espacio público para plantear reivindicaciones, que aumentaron en el año 2013 a 2.027, siendo esta la cifra más alta desde que dicha entidad conserva registros (1975). Sin embargo, tan o más importante que el aumento de las protestas son los rasgos cualitativos de las mismas.

Un ejemplo de ello es el paro nacional universitario adelantado entre octubre y noviembre del 2011, siendo una manifestación inédita, por el alcance territorial, el grado de aceptación social y la victoria relativa del movimiento estudiantil al originar el retiro de la reforma al sistema de educación superior (Cruz, 2012). No obstante, en este paro, en extrañas circunstancias, se registró un estudiante muerto durante una manifestación en la

ciudad de Cali, donde hubo enfrentamientos entre estudiantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). Es de anotar que en varias ocasiones autoridades civiles y policiales criminalizaron la protesta con denuncias de presunta infiltración de la guerrilla (Cruz, 2012, pp. 155-156).

Caso que no ocurrió con el paro cafetero, ocurrido entre febrero y marzo del 2013, ya que allí comenzó un incremento en los niveles de represión, gracias a los señalamientos de los ministros de agricultura y defensa, al igual que policiales, quienes acusaron de infiltración en la protesta por parte de la guerrillera, a lo cual se agregaron distintas agresiones del ESMAD, dejando como resultado cerca de cien lesionados, un muerto y la apertura de varias investigaciones judiciales, al igual que judicialización de treinta personas con sustento en la Ley de Seguridad Ciudadana del 2011, la cual penaliza los bloqueos de vías públicas (Cruz, 2013).

Posteriormente, en el paro campesino del Catatumbo del año 2013, desarrollado primordialmente con bloqueos a vías arterias, se incrementaron las estrategias de criminalización y represión, en donde El Ministerio de Defensa concurrió a los medios de comunicación haciendo señalamiento de infiltraciones de la guerrilla de las FARC entre los líderes de la protesta, acusaciones que no fueron llevadas al contexto judicial como correspondería, aunque dificultaron los acercamientos iniciales entre los manifestantes y el gobierno (Movice-CCEEU, 2013). La represión estatal en esta protesta dio como resultado cuatro campesinos muertos por heridas de bala producidas disparadas por armas largas de uso de la fuerza pública (Movice-CCEEU, 2013); hasta la policía utilizó helicópteros para disgregar las manifestaciones e incluso se presentaron denuncias de uso de armas no convencionales o no autorizadas (CINEP y Programa por la paz, 2013).

Pese a los anteriores sucesos, se vio un mayor impacto de la represión en desarrollo del Paro Nacional Agrario, por lo menos así lo evidencia las cifras presentadas por Rozo (2013), investigador del CINEP, quien a partir de los datos de la Policía Nacional manifiesta que se presentaron 873 capturas, de las cuales el 57% fueron judicializadas. Tal fue el grado de represión alcanzado en estas manifestaciones que varias organizaciones que defienden los derechos humanos, como el “Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos”, oficiaron solicitud de audiencia acerca del tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó en el marco de su Periodo de Sesiones 139, informe que muestra unas cifras globales según las cuales:

902 personas fueron víctimas de algún tipo de agresión. Del total de los casos, 15 personas fueron asesinadas, 7 víctimas de algún tipo de acto cruel o tortura, entre ellos un abuso sexual; 315 personas detenidas arbitrariamente, 40 personas víctimas de fuertes golpizas, 329 que, a causa de los ataques, resultaron con algún tipo de lesión y/o herida y 5 personas con heridas graves que les derivó incapacidad parcial o total. Es de resaltar que en 70% de los casos, las agresiones estuvieron acompañadas por otros tipos de violaciones. (Movice- CCEEU, 2013, p. 23).

De acuerdo con el mismo informe, el 88,15% de los hechos denunciados fueron imputados a la policía (52% el ESMAD, 1,22% la Seccional de Policía Judicial e Investigación, 35,48% la Fuerza Disponible) y el 1,55% de las acciones de represión fueron adjudicadas al Ejército (Movice-CCEEU, 2013).

Los casos de abuso de autoridad generados por el ESMAD se recrudecieron, tal como las cifras lo demuestran: “Entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes

de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual” (Cruz, 2017; párr. 3).

Según el informe XXV realizado por el Defensor del Pueblo al Congreso de la República, en Colombia en el transcurso del año 2017 se presentaron en promedio 177 manifestaciones o protestas sociales mensualmente, siendo el mes de mayo el periodo con mayor número de hechos conocidos por la entidad. La Defensoría el pueblo relacionó esta tendencia con importantes escenarios de protesta nacional como el paro de Federación Colombiana de Educadores (Fecode), jornadas de cese de actividades de los sindicatos de trabajadores del Estado y otras dinámicas regionales como el paro cívico de Buenaventura y Chocó. Sin embargo, durante el resto del año sobresalieron las diferentes protestas de sectores campesinos dedicados a cultivos de uso ilícito y la Minga Nacional Indígena por la Vida (Defensoría del Pueblo, 2017).

Además, según el Sistema de Información Institucional Visión Web, ATQ, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017 la Defensoría recibió 159 quejas por violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública (90% Policía Nacional y 10% Ejército Nacional) en el marco de escenarios de protesta social. Siendo el paro de Buenaventura el evento que concentra el mayor número de quejas (65%), seguido de sucesos relacionados con protestas de comunidades ante la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito (22%) (Defensoría del Pueblo, 2017).

Durante el 2017 y lo que va corrido del 2018, diversos episodios de protesta social han llamado la atención de la opinión pública, una parte de la cual cuestiona la legalidad de paros, tomas y huelgas, así como su legitimidad frente a la defensa de derechos. El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, por ejemplo, ha dicho que, en algunos territorios, los grupos

armados ilegales financian estas manifestaciones, lo que ha causado el rechazo de diversos sectores que sienten que la protesta está estigmatizada e instrumentalizada por una variedad de agendas e intereses (Burbano, 2018).

Para Castañeda (2018, citado por Moreno, 2018; párr. 8): “Se ha vuelto normal, sin que haya mayor reacción social o mediática, que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. En 2017 catorce personas perdieron la vida bajo este contexto, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete las que perdieron la vida, y recuerdo que en el 2013 fueron quince”.

Es más, durante los primeros meses de gobierno presidencial de Iván Duque, en el país hubo 348 movilizaciones, lo que marca un aumento del 59% frente a las protestas en el periodo de agosto a octubre de 2017. No obstante, en Colombia sigue persistiendo un ambiente que estigmatiza y criminaliza el ejercicio de la protesta social, y un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y, particularmente, por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), como el Observatorio ha denunciado reiteradamente.

De lo anterior se puede deducir que la represión y la criminalización han sido prácticas estatales variables en el tiempo y en el espacio de acuerdo con las características de la protesta y las acciones colectivas puestas en práctica, pues cuando los colectivos realizan acciones lúdicas, simbólicas o expresivas la represión baja y aumenta cuando se extiende a los bloqueos de vías. Así mismo, se va mayor frecuencia de represión cuando las manifestaciones se producen en el campo, donde es mayor el aislamiento y menores las condiciones de la comunicación, que en la ciudad.

El grupo de Escuadrón Móvil Antidisturbios “ESMAD” tiene como función principal el control y el manejo de las multitudes, disturbios y manifestaciones con el fin de reestablecer el “orden público” cuentan con un uniforme especial de protección. En efecto, es indiscutible la desventaja en que se encuentra un grupo de manifestantes con autoridad como el ESMAD, debido a que este grupo ha sido capacitado, entrenado y armado, no sólo para “controlar” un disturbio sino para terminar intempestivamente mediante el uso excesivo de la fuerza una marcha que de manera pacífica se inició y del cual estos interfieren arbitrariamente en el desarrollo normal de la misma. En un caso hipotético, el manifestante ante tal injusticia y en un Estado de indefensión no puede ni tiene el derecho de responder a este abuso de autoridad debido a que las leyes de nuestro país penalizan la violencia contra el servidor público como los agentes del ESMAD convirtiendo al manifestante en delincuente y terrorista, así como lo expresa la misión de ese escuadrón:

Es la dependencia del Comando de Unidades Operativas Especiales, integrada por personal entrenado y capacitado, encargado del control de disturbios, multitudes, bloqueos acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales, para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas. (Policía Nacional, 2017).

En suma, limitar el derecho a la protesta en el estado colombiano es una imposición que desnaturalizan los pilares que componen el Estado Social y Democrático de Derecho con medidas que afectan las múltiples minorías sociales, transgrediendo sus libertades y derechos para organizarse a fin de defender sus derechos de forma pacífica o por vías de hecho cuando se haga manifiesto el derecho a la legítima defensa o la situación lo amerite,

y así se garantice la protección a derechos de los participantes y de terceros. Remontando, se encuentra un común denominador en los gobiernos de Colombia, desplegando legislación impopular, contra consensos de la opinión pública, evidenciando desproporcionalidad y contrariedad con los principios que juran defender. Marcos jurídicos concertados con sectores de gremiales de particulares intereses que generalmente tranzas de forma permanente los poderes del Estado en todos los niveles jerárquicos institucionales. Mal uso de la fuerza pública, violencia y judicialización es la respuesta en escenarios de movilización legítimos en donde el estado no tiene voluntad de ceder, es incapaz de negociar y no es incluyente con las demandas sociales.

Conclusiones

El derecho a la protesta social es la unión desprendida de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la reunión, juntos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, no sólo del sistema universal sino también del interamericano de protección de los derechos humanos. Los cuales han sido aclarados, en material de significado y alcance por los órganos encargados de la interpretación y seguimiento al cumplimiento de dichos instrumentos, dejando ver que la protesta se debe dar sin cohesión y mucho menos represión.

En Colombia, el derecho a la protesta se encuentra inmerso en los derechos de reunión pacífica, manifestación y libertad de expresión, consagrados en los artículos 20 y 37 de la Constitución Política Nacional. Sin embargo, la normatividad mencionada se encuentra fundamentada en un sesgo punitivo, pudiendo ser esta parte de las estrategias de represión del gobierno de Santos, gracias al ciclo ascendente de protesta. Efectivamente, como es demostrado por varios de los análisis de Movice-CCEEU (2013), la Ley 1453 del 24 de junio del 2011, también llamada de “Seguridad Ciudadana”, que, entre otros, reforma el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, posee una vista netamente represiva de la protesta social.

Es claro que en Colombia el Gobierno Nacional cuenta con política de criminalización de la protesta, tal y como lo demuestran los datos presentados sobre muertos, heridos, capturados y judicializados en las protestas de relevancia presentadas, en donde se demuestra una tendencia a agravar las imputaciones a ciudadanos que participan en protestas sociales, a través del uso de figuras penales que penden como una amenaza, cuestionando

derechos como la movilización popular, la libertad de reunión, y principalmente la libertad de expresión, por ende la protesta social se transforma en una expresión del derecho penal del enemigo, encuadrándolas el Estado en las acciones de la política criminal del Estado colombiano, en el momento que son tipificadas como delitos que aparentemente afectan al orden público, a la asociación ilícita, lo que intimida a la población a hacer uso de los derechos humanos, a los que el Estado ha pactado cumplir.

Ahora bien, para la época de abril del año 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional, decidió suprimir del nuevo Código de Policía, aquellos artículos en que se regulaban tanto el derecho a las reuniones como a las manifestaciones públicas, plasmados en el capítulo sexto desde el art. 47 hasta el 75, al considerar que el Congreso no tuvo en cuenta que se trataba de derechos fundamentales amparados por la Constitución y por tanto debió tramitarse mediante una ley estatutaria y no por una ordinaria tal como se hizo. No obstante, concedió un plazo de dos años durante los cuales se podrán aplicarse, pero vencidos éstos, y de no ser tramitado legalmente, quedarán sin vigencia alguna; decisión que adoptó luego de resolver una demanda, que, en hora buena, el observatorio de Intervención Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre presentó.

Nótese, como a sabiendas que en Colombia el derecho a la protesta está íntimamente ligado a la libertad de expresión, garantizado por el art. 37 de nuestra Constitución política, ha sido concebida como una libertad pública fundamental por constituir una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para el ejercicio de sus derechos políticos.(C-179/1994), Tanto así, que esta misma sentencia determina, que ni siquiera en el marco de una declaratoria de estado de conmoción interior; el Gobierno puede tipificar como delito los actos legítimos de protesta social; y en el Código de Policía Nacional y de

Convivencia, la movilización social pierde su carácter de derecho fundamental; es decir, al colmo de desconocer la definición de Colombia como un Estado social de derecho, democrático y pluralista y restringe derechos y principios fundamentales que están garantizados por la Constitución. El Código de Policía “Criminaliza algunos de los actos propios del ejercicio de la movilización ciudadana”, tal como lo señala el Magistrado Iván Palacio (C-742/2012), restringiendo el derecho a disentir; entonces, si el legislativo no puede restringir ni vulnerar un derecho fundamental, menos aún, la autoridad policiva.

La limitación del derecho a la protesta, resulta contraria al propósito de construcción de paz y por el contrario, obstaculiza los avances en la democratización del país, entonces, el nuevo Código de Policía es un código con visión punitiva y criminalista y de ninguna manera civilista, pues se amplían los motivos que justifican la intervención de la fuerza pública y entonces ante en un Estado represor como el colombiano, estas medidas serán usadas para abusar de su autoridad y realizar acciones con motivaciones políticas y de persecución.

En definitiva, el carácter represivo y punitivo de este Código de Policía Nacional, además de ir en contravía de las promesas democráticas, impacta con mayor fuerza sobre las poblaciones excluidas social y culturalmente, representando un gran retroceso no solo con relación a los Acuerdos de Paz sino frente a las demandas democráticas de las comunidades y procesos sociales.

Por todo ello se confirma la hipótesis del presente estudio, pues de acuerdo con lo expuesto sea podido evidenciar la brecha existente en el ordenamiento jurídico, la cual impide el protección y cumplimiento del derecho a la protesta socia acorde a los estándares internacionales, por lo que se ven vulnerados los derechos de los individuos a su libre

expresión y libre agrupación, por ello es necesario que el legislativo y el judicial revaliden las acciones de protección de este derecho.

De acuerdo con los resultados es preciso que la convención americana de derechos humanos tome un papel más protector y exigente de cumplimiento frente a los estándares establecidos para los Estados parte, respecto del funcionario público "policía" quien debería tener a cargo la protección y el acompañamiento a los protestantes con el fin de garantizar la democracia en un Estado.

Siendo la protesta un mecanismo de control democrático que se da por falencias institucionales o afectación de derechos en un Estado, en donde los políticos siempre quieren tener el poder, el control y gobernar para su propio beneficio, creando leyes para criminalizar "estos actos de rebeldía del pueblo" obstaculizando el libre ejercicio del derecho a la protesta limitando así este derecho fundamental y esencial para defender el pueblo

De igual forma el Estado debería garantizar el cumplimiento de estos derechos y los acuerdos internacionales suscritos por Colombia respetando los lineamientos establecidos de derechos humanos, políticos y sociales.

A su vez, la Corte Constitucional Colombiana debería sentar preceptos de doctrina y jurisprudencia donde se le dé el lugar que se merece la protesta social, buscando con ello mitigar las acciones restrictivas y represivas que se dan tan cotidianamente en el actual contexto colombiano.

Para esto es necesario que la Convención Americana de Derechos Humanos establezca límites a la fuerza pública y prohíba el uso de armas las cuales lesionan y pueden provocar la muerte de los que participan en una manifestación; esto con el fin de prevenir violaciones a los derechos humanos.

A los ciudadanos colombianos para que ejerzan su derecho a la libre expresión y reunión, conjurando el derecho a la protesta social pacífica cuando se sientan inconformes, dejando a un lado el miedo a la represión y a la judicialización.

En definitiva, con el desarrollo del presente estudio se buscó identificar las diferencias y similitudes de la normatividad y jurisprudencia con relación al derecho a la protesta proferida en Colombia y el estándar internacional. Para ello también se profundiza en el marco normativo internacional buscando obtener claridad sobre los conceptos, figuras y lenguaje que rigen la materia.

Se espera que la información resultante del presente estudio sirva para ampliar el debate académico y normativo en materia de derecho a la protesta, sirviendo más como fuente de conocimiento para abogados, estudiantes, docentes y comunidad en general, que para propiciar una postura de juicio sobre el tema.

Referencias

- Badassarre, A. (1993). *Diritti della persona e valori costituzionali*. Torino: Giappichelli.
- Burbano, C. (2018). *¿Cómo se rige la protesta pacífica en Colombia? El ejercicio y la garantía de un derecho fundamental*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) (2019). *Quinto informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales Felipe González y José Mujica (A.F. 6.3.2)*. Bogotá: CINEP.
- (2014). *Luchas sociales en Colombia 2013*. Bogotá: CINEP.
- CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) y Programa por la paz (2013). *Luchas sociales, derechos humanos y representación política del campesinado 1988-2012 [Informe especial]*. Bogotá: CINEP.
- CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) (2008). Panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia. *Noche y Niebla*, (36). 193 p.
- Comisión Interamericana de Derecho Humanos CIDH (2011). Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las américas. Organización de los Estados Americanos.
- (2005). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005, Volumen II, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7.
- (1994). Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capítulo V. OEA/Ser. L/V/II.88, Doc. 9 rev.

Comisión Nacional Constituyente (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Editorial Legis.

Comité Contra la Tortura CAT (2009), Observaciones finales del Comité contra la Tortura, España, CAT/C/ESP/CO/5, 19 de noviembre de 2009.

Comité de Derechos Humanos sobre la libertad de circulación (1999). Observación general N° 27

Concha, M. (9 de febrero de 2013). Contra la criminalización de la protesta social. La Jornada. Recuperado en diciembre de 2018, de <http://www.jornada.unam.mx/2013/02/09/politica/021a1pol>.

Consejo Nacional Constituyente (1886). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia (2016). *Ley 1801, Código de Policía Nacional y Convivencia*. Bogotá: Diario Oficial.

----- (2000). *Ley 599, Estatuto de Seguridad Ciudadana*. Bogotá: Diario Oficial.

Corte Constitucional (2017). Sentencia C-223/17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Bogotá. 20 de abril.

----- (2012). Sentencia C-742 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. Bogotá. 26 de septiembre.

----- (1994). Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Bogotá. 13 de abril.

----- (1993) Sentencia T- 219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Bogotá. 9 de junio.

----- (1992). Sentencia T-456. Magistrados Ponentes, Jaime Sanin Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá. 14 de julio.

- Corte Europea de Derechos Humanos (2011). Gulizar Tuncer vs. Turquía. Recuperado en mayo de 2019, de <http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones-2011/20110520/54158192830/rubalcaba-no-aclara-si-ordenaradesalojar-las-acampadas-de-los-indignados.html>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de julio de 2009 Serie C No. 201
- . Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio. Serie C No. 4.
- (1989). Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero. Serie C No. 5.
- (1986). La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC- 6/86 del 9 de mayo. Serie A No. 6.
- Cruz, C. D. (2017). *La protesta social en Colombia: Interpretación, comprensión, aplicación desde la teoría política*, Tesis de pregrado. Ibagué: Universidad del Tolima.
- Cruz, E. (agosto de 2017). Colombia: ¿Por qué es necesario desmontar el ESMAD?. Recuperado en mayo de 2019, de <https://www.telesur tv.net/opinion/Colombia-Por-que-es-necesario-desmontar-el-Esmad-20170821-0023.html>
- Cruz, E. (2015). El derecho a la protesta social en Colombia. *Pensamiento Jurídico*, (42); pp. 47-69.
- Cruz, E. (2014). Dignidad en movimiento. El ascenso de la movilización social en Colombia. *Confluenze. Revista di Studi Iberoamericani Università di Bologna*, 6(25); pp. 241-275.

- Cruz, E. (2013). Todos somos hijos del café: Sociología política del paro nacional cafetero. *Entramado*, 9(2); pp. 138-158.
- Defensoría del Pueblo (2017). *Vigésimo Quinto Informe del Defensor del Pueblo de Colombia al Congreso de la República*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Espinosa, R. (2014). Defender los derechos, defender la protesta. *El Cotidiano*, 186; pp. 97-118.
- Fuentes-Nieva, R. y Feroci, G. N. (2017). Los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, la evolución de su papel e influencia, y su creciente fuerza. *International Development Policy / Revue internationale de politique de développement*, [Online], 9. Recuperado en junio de 2019, de <http://journals.openedition.org/poldev/2511>
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (2018). *El derecho a la protesta social. Cartilla de formación para la verificación e intervención de la sociedad civil durante la protesta social*. Bogotá: CSPP.
- Gamboa, F. (2014). El conflicto en Ucrania: A diez años del fracaso de la Revolución Naranja. *Ciências Sociais Unisinos*, 50(1); pp. 97-100.
- Gargarella, R. (2012). El derecho frente a la protesta social. *Temas*, 20; pp. 22-29.
- (2007). *El derecho a la protesta*. Buenos Aires: Ad Hoc.
- (2006). El derecho a la protesta social. *Derecho y Humanidades*, 12; pp. 141-151.
- (2006). Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Godás, X. (2007). Política del disenso. Sociología de los movimientos sociales. Barcelona, España: Icaria.

- González, R. y Molinares, I. (2013). Movimiento obrero y protesta social en Colombia. 1920-1950. *Historia Caribe*, 8(22); pp. 167-193.
- Grupo interdisciplinario de Bioética (2012). Objeción de conciencia en el ámbito de los profesionales de la salud. *Bioética y Debate*, 18(66); pp. 8-11.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. Sexta Edición. México: Edit. McGraw Hill.
- Islas, R. (2009). *Sobre el principio de legalidad*. Montevideo: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.
- Leal B., F. (2003). La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur. *Revista de Estudios Sociales Universidad de los Andes*, junio de 2003, pp. 74-87.
- Legis (marzo de 2016). INFORME: Las ocho directivas que dejó Montealegre. [En línea] Recuperado en junio de 2019, de <https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/penal/informe-las-ocho-directivas-que-dejo-montealegre>
- López de la Roche, F. (2014). *Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010)*. Bogotá: Debate, Universidad Nacional de Colombia.
- Manzo, G. A. (2018). Sobre el derecho a la protesta. *Novum Jus*, 12(1); pp. 17-55.
- Martín, V. (2012). Relatos de memoria: Lecturas mediáticas de la revolución de terciopelo a partir del imaginario colectivo de la transición española. *Historia Actual Online*, (28); pp. 143-150.

- Medina, C. (2003). *La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial*. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
- Ministerio del Interior (2018). *Resolución 1190 de 2018, Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica*. Bogotá: Mininterior.
- Montesquieu, C. S. (2001). *Del espíritu de las leyes*. 14ª Edición. México: Porrúa.
- Moreno, J. (agosto de 2018). Movimientos sociales y el protocolo para la protesta pacífica. Recuperado en mayo de 2019, de <https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/34920-movimientos-sociales-y-el-protocolo-para-la-protesta-pacifica.html>
- Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) y CCEEU (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos) (2013). *Informe sobre protesta social y derechos humanos*. Recuperado en mayo de 2019, de <http://www.ddhhcolombia.org.co/sites/default/files/files/pdf/CCEEU%20y%20Movice%20Informe%20ante%20CIDH%20sobre%20Criminalizacin%20de%20la%20Protesta%20Social%20en%20Colombia.pdf>
- Muñoz, J. A. (2014). Movimiento estudiantil: universidad y democracia en América Latina. Elementos para el análisis. Elementos para el análisis. *Ciudad Paz-Ando*, 6(2); pp. 158-166.

- O'Donnell, G. (2004). Democracia y Estado de Derecho. *Journal of Democracy*, 15(4); pp. 32-46.
- Olano, H. A. (2005). El bloque de constitucionalidad en Colombia. *Estudios Constitucionales*, 3(1); pp. 231-242.
- Organización de las Naciones Unidas (2014). *Protesta social y derechos humanos: Estándares internacionales y nacionales*. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Derechos Humanos y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- (2012). Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. Distr. General. A/HRC/20/27, 21 de mayo.
- (2010). Resolución 15/21 del 30 de septiembre. Derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. New York: El autor.
- Organización Internacional del Trabajo (1948). *Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación*. San Francisco: OIT.
- Ortegón, J. L. (2016). ¡La tal marcha sí existe! Garantías para la protesta social en Colombia, Tesis de magister. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Peschard, J. (1997). *Cultura política democrática*. México: IFE.
- Priego, A (2011). La primavera árabe: ¿una cuarta ola de democratización? *UNISCI Discussion Papers*, (26); pp. 75-94.
- Prieto, L. (2006). Libertad y objeción de conciencia. *Persona y Derecho*, 54; pp. 259-273.
- Policía Nacional (2017). Escuadrones Móviles Antidisturbios. Recuperado en octubre de 2017, de <https://www.policia.gov.co/especializados/antidisturbios>

- Recasens, A. (2014). La seguridad y sus límites: claves para la construcción de un producto. *Revista de Direito e Segurança*, 2(3).
- Rodríguez, J. (Febrero de 2013). ¿Sirve de algo manifestarse? [En línea] Recuperado en junio de 2019, de <https://mareanaranjagranada.wordpress.com/2013/02/22/sirve-de-algo-manifestarse-2/>
- Rozo, W. (2013) ESMAD Arma Letal. En: Revista Cien Días No. 80. Septiembre- Noviembre de 2013. Bogotá: CINEP. Recuperado de: <http://bit.ly/1RybySj>
- Rubio, F. (1993). *La forma de poder*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Silicia, A. (noviembre de 2012). 5 protestas sociales que cambiaron el mundo. [En línea] Recuperado en junio de 2019, de <http://stellae.usc.es/red/file/download/23626>
- Suárez, F. (1956). *Intervención y paz internacional*. Trad. Luciano Pereña y Vicente. Madrid: Espasa Calpe.
- Tilly, Ch. & Wood, E. (2010). Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook. Barcelona, España: Crítica.
- Thoreau, H. D. (2008). *Desobediencia civil y otros escritos*. Madrid: Tecnos.
- Universidad Libre (2019). Misión - Visión. [En línea] Recuperado en marzo de 2019, de <http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/sobre-la-universidad/mision-vision>
- Uprimny, R. y Sánchez, L. (2010). Derecho penal y protesta social. En Bertoni, E. (comp.). *¿Es legítima la criminalización de la protesta? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina*. Buenos Aires: CELE, Universidad de Palermo.
- Vázquez, C. S. (2008). La objeción de conciencia en la práctica médica. Actas del I Congreso internacional multidisciplinar Mujer y realidad del aborto. Ed. Lázaro Pulido (Cáceres: Asociación Extremeña de Amigos del Foro Español de la Familia).

- Vega, R. (2013). Algunas ideas sobre el papel del historiador crítico. *Rebelión*, 8.
- Velazco, D. y Contreras, L. (2004). Las nuevas configuraciones de la protesta social: la toma de la Planta de Repsol YPF en Comodoro Rivadavia. *Papeles de Nombre Falso*, 2003-2004.
- Zagrebelsky, G. (1995). *El derecho dúctil*. Madrid: Editorial Trotta.
- Zuloaga, L. (2014), *El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política*. Madrid: Los Libros de la Catarata.